



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROLEDI

Democracia en riesgo:

percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación



UNIÓN EUROPEA



NUEVOS PERIODISTAS, NUEVAS HISTORIAS

CRÉDITOS

Autores y autora:

- ▲ Óscar Mario Jiménez Alvarado
- ▲ Johanna Rodríguez López
- ▲ Suráyabi Ramírez Varas

Dirección Académica PROLEDI

- ▲ Giselle Boza Solano

Coordinación del Programa para América Latina de Free Press Unlimited

- ▲ Paloma Lainz

Coordinación logística y de proyectos de PROLEDI

- ▲ Geannina Sojo Navarro

Asistentes de investigación

- ▲ Gerald Mora Alvarado
- ▲ Mariana Rojas Herra

Coordinación del trabajo de encuesta

- ▲ Ronald Alfaro Redondo, CIEP

Coordinación y supervisión del trabajo de campo de la encuesta

- ▲ Centro de Investigación y Estudios Políticos

Elaboración de cuestionario

- ▲ Equipo de investigación del PROLEDI

Diseño y diagramación

- ▲ Valeria Araya Villalobos

CONTENIDOS

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL	4
METODOLOGÍA	6
PERCEPCIONES CIUDADANAS	11
SOBRE LA DESINFORMACIÓN	11
Percepción y actitudes ante la desinformación	12
Consumo y propagación de los contenidos	15
Análisis multifactorial sobre la percepción de la desinformación	18
Relación entre características de las personas y sus opiniones	19
LA VISIÓN DE LOS GRUPOS Y POBLACIONES AFECTADAS	21
Narrativas dominantes de desinformación	22
Efectos observados y percibidos	24
¿Quién produce, quién amplifica y quién calla?	25
VALORACIONES DE PERSONAS EXPERTAS Y LIDERAZGOS	26
La desinformación como una amenaza multidimensional	27
Las primeras fracturas: impactos en curso de la desinformación	29
Un Estado sin defensas: la institucionalidad frente a la desinformación	31
Riesgos futuros y crisis emergentes observadas	33
Entre lo posible y lo necesario: ¿Qué puede hacer Costa Rica y por dónde empezar?	34
DESINFORMACIÓN Y PLANES DE GOBIERNO 2026 - 2030	36
Análisis comparado de los planes de gobierno	37
Medidas y acciones propuestas	39
RECOMENDACIONES PARA LUCHAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN	42
PRINCIPALES HALLAZGOS	45
REFERENCIAS	48

PRESENTACIÓN

La desinformación se ha consolidado como uno de los desafíos más relevantes para las democracias contemporáneas. Diariamente circulan por celulares, pantallas y perfiles de redes sociales de todo el mundo grandes volúmenes de contenidos falsos que buscan dañar el debate público, deteriorar la convivencia social, minar la confianza en las instituciones y afectar el funcionamiento adecuado de la democracia. Se trata de un problema global, que ha impactado negativamente en campañas electorales y procesos políticos de distinta índole, generando confusión, polarización y una marcada erosión de los sistemas políticos y mediáticos.

Lamentablemente, Costa Rica no es una excepción en este escenario. En los últimos años, se han difundido una gran cantidad de productos de comunicación diseñados deliberadamente para dañar o atacar poblaciones, instituciones, autoridades, periodistas, políticas públicas, medios de comunicación, deportistas, empresas privadas, entre otros. La variedad de contenidos ha sido enorme, como lo demuestra la abundancia de ejemplos registrados en la última década.

En distintos momentos, se ha hecho uso de contenidos desinformativos para promover marchas xenofóbicas, generar motines en hospitales o incitar la toma de centros educativos (Alfaro, 2018; Solano, 2018; Chinchilla, 2021; Jiménez, 2022). También, se han difundido materiales en los que se suplanta la identidad de autoridades, periodistas y figuras públicas, y en los que se atacan con mentiras a hospitales como el Nacional de Niños, el de Nicoya o el de Cartago (Chinchilla, 2022; Córdoba, 2024; Segura, 2025). Más recientemente, se han propagado productos destinados a desincentivar la participación en la Marcha de la Diversidad y a estigmatizar a personas funcionarias públicas y a órganos de control (Castro, 2018; Bolaños, 2024; Chinchilla, 2025a, 2025b)

La intoxicación deliberada del espacio público también se ha extendido al ámbito electoral. En los últimos procesos, se han fabricado encuestas y se ha intentado sembrar dudas sobre la integridad y la imparcialidad de las autoridades electorales (Céspedes, 2020; Pomareda, 2024; Cordero, 2024; Mora, 2025). La ofensiva ha sido tan severa que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría, advirtió al cierre de los comicios municipales que el organismo nunca había enfrentado un ataque tan agresivo, plagado de calumnias y discursos de odio (Romero, 2024).

Es en este contexto de hostilidad, confusión e incertidumbre que se publica esta investigación. Su propósito es ofrecer una mirada informada sobre las percepciones existentes en el país respecto de este fenómeno, así como aportar elementos para comprender su alcance, sus impactos y los desafíos que plantea para la vida democrática. Con ello, se busca enriquecer la reflexión colectiva sobre los riesgos que enfrenta nuestra democracia y contribuir a la formulación de respuestas más sólidas e integrales.

Para cumplir con estos objetivos, el estudio combina técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas que permiten analizar las percepciones de diversos actores. Se incorporan las opiniones de la ciudadanía, los aportes de personas expertas, las experiencias de poblaciones directamente afectadas por mentiras difundidas en redes sociales y las posiciones de los partidos políticos que competirán por la Presidencia de la República en febrero de 2026.

El estudio tiene un carácter exploratorio y descriptivo. Si bien su propósito principal es comprender el fenómeno, al final se presentan una serie de recomendaciones dirigidas a personas tomadoras de decisión y a autoridades públicas. Estas sugerencias no buscan erradicar por completo la desinformación, pero sí reducir sus impactos negativos, fortalecer las capacidades institucionales y orientar respuestas más eficaces para enfrentarla.

Finalmente, se debe mencionar que este informe fue posible gracias al trabajo articulado entre el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el proyecto CRIíticaMente, impulsado por las organizaciones no gubernamentales Free Press Unlimited, People in Need y Punto y Aparte. Esta alianza, que combina esfuerzos nacionales e internacionales y articula la colaboración entre la academia y la sociedad civil, ha permitido construir una mirada más amplia y enriquecida sobre un fenómeno complejo como la desinformación.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Delimitar el significado de la palabra “desinformación” es una tarea más compleja de lo que parece. Aunque el término se emplea con frecuencia en medios de comunicación, redes sociales, estudios académicos, discursos políticos y textos de opinión, sus diversos usos suelen abarcar fenómenos muy distintos e incluso contradictorios. Esta amplitud ha generado debates sobre qué entender realmente por este concepto y cómo diferenciarlo de otros problemas informativos.

Conceptualmente, esta investigación adoptó el enfoque promovido por instituciones de la Unión Europea, que definen la desinformación como contenido falso o engañoso difundido con la intención deliberada de engañar o de obtener beneficios económicos, políticos o estratégicos (Wardle y Derakhshan, 2017; Comisión Europea, 2018). Desde esta perspectiva, la circulación organizada de contenidos desinformativos constituye una forma de manipulación ejercida por actores estatales y no estatales, cuyo objetivo es intervenir y distorsionar los entornos informativos contemporáneos (Council of the European Union, 2025).

Para estas y otras instancias europeas, la desinformación tiene la capacidad de erosionar la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación (European Commission, 2021). Asimismo, puede causar daños significativos al debate democrático e influir en la toma de decisiones informadas (Tribunal de Cuentas Europeo, 2021), distorsionando la manera en que la ciudadanía percibe y reacciona ante la información y la verdad fáctica (Unión Europea, 2018).

Por tanto, este informe comprende la desinformación como un fenómeno que no solo depende de la falsedad del contenido, sino también de cómo las personas lo interpretan y lo incorporan en sus percepciones cotidianas. En consecuencia, el análisis se centra en comprender cómo distintos grupos poblacionales evalúan estos contenidos, pues son esas percepciones las que finalmente determinan su alcance, sus efectos y su influencia en la vida pública.

Ahora bien, para orientar la interpretación empírica, este informe se apoya además en tres supuestos analíticos complementarios que ayudan a explicar por qué la desinformación adquiere una relevancia particular en el contexto contemporáneo.

Un primer supuesto es que las facilidades técnicas y operativas disponibles hoy, y que están derivadas de la infraestructura de internet y las tecnologías digitales, no explican por sí solas ni el alcance ni el impacto de la desinformación. Su propagación depende también de un contexto político-social que favorece su circulación y permite que determinados contenidos adquieran resonancia.

Esta favorabilidad se vincula con el hecho de que las instituciones y las instancias que habían estado históricamente encargadas de definir qué es verdadero y qué es falso han perdido buena parte de la confianza ciudadana. Con ello, ha entrado en crisis el llamado “régimen de verdad” que había regulado hasta la fecha la construcción social de lo verdadero, generando un espacio lo suficientemente amplio para que relatos y narrativas falsas puedan ser aceptadas como ciertas.

Según Foucault, el concepto de “régimen de verdad” permite comprender cómo cada sociedad dispone de instituciones y procesos que determinan qué se reconoce como racional y verdadero. Se trata del conjunto de técnicas, mecanismos, instancias y procedimientos a los que se les concede autoridad en la producción de verdad y que permiten distinguir los enunciados verdaderos de los falsos (Foucault, 2019, pp. 41–45). En las sociedades liberales del siglo XX, este entramado se sustentó en el modelo científico (Waisbord, 2018), y tanto los medios de comunicación como el periodismo desempeñaron un papel central en su consolidación (Jones, 2009).

Ese sistema de validación, sin embargo, atraviesa hoy una profunda crisis. Diversos planteamientos sostienen que asistimos al colapso del estatus fiduciario en la enunciación y verificación de la verdad, así como a una pérdida de coordinación entre los aparatos que antes estructuraban los criterios, prácticas e instancias para determinar qué discursos se aceptaban como verdaderos, cómo se distinguían de los falsos y quiénes tenían la autoridad para establecer esa distinción (Harsin, 2015, p. 3; Harjuniemi, 2022). El contexto contemporáneo, caracterizado por la fragmentación de las fuentes de información y la ausencia de instituciones ampliamente reconocidas como árbitros confiables, resulta especialmente propicio para la circulación de falsedades.

Un segundo supuesto es que no se trata de un fenómeno reciente. La fabricación de contenidos que buscan manipular deliberadamente la opinión pública para obtener réditos tiene una larga trayectoria histórica (Posetti y Matthews, 2018). Carazo-Barrantes, Tristán-Jiménez y Siles (2021: p. 5), Kent (2013) y Waisbord (2021: p. 23-24) subrayan en distintos textos que estas prácticas han estado presentes en múltiples coyunturas históricas y se han reconfigurado conforme evolucionan las tecnologías de comunicación. Desde una perspectiva crítica, incluso puede afirmarse que este fenómeno no solo tiene un amplio recorrido, sino que ha estado vinculado a proyectos políticos e iniciativas concretas de dominación (Kuo y Marwick, 2021).

Lo novedoso, entonces, no es la existencia de contenidos desinformativos, sino la capacidad actual para producirlos y difundirlos a gran escala (Waisbord, 2021: p. 24). Las redes sociales y el desarrollo de internet han facilitado considerablemente ambos procesos al permitir la generación, circulación y amplificación con una velocidad antes inimaginable (Lazer et al., 2018).

Un tercer supuesto es que la desinformación no siempre adopta la forma de lo que comúnmente se entiende como una “noticia”, sino que también circula mediante cadenas de WhatsApp, memes, imágenes descontextualizadas, audios y otros formatos alternativos (Carazo, Tristán-Jiménez y Cajina-Rojas, 2023: p. 190). En otras palabras, son contenidos que asumen múltiples formas y se difunden de manera rápida, viral e informal a través de servicios de mensajería y otras plataformas digitales (Klein y Weller, 2017). Desde esta perspectiva, los materiales que imitan una “noticia tradicional”, y que son conocidos como parte de las “noticias falsas” (Brenes Peralta, Perez Sanchez y Siles, 2021) constituyen sólo uno entre los muchos tipos de desinformación que circulan en la actualidad.

Si se consideran tanto el enfoque adoptado como los supuestos previamente expuestos, es posible afirmar que este informe entiende la desinformación como un fenómeno que opera dentro de un ecosistema en transformación, marcado por la erosión de las autoridades tradicionales de la verdad y la diversificación de los formatos propagadores de la mentira. En consecuencia, más que un problema exclusivamente técnico o comunicacional, se trata de un fenómeno profundamente anclado en dinámicas de confianza, poder y desigualdad.

METODOLOGÍA

Este informe tiene un carácter exploratorio y descriptivo, y se sustenta en un enfoque metodológico mixto que integra técnicas cuantitativas y cualitativas. La investigación se apoya en cuatro análisis complementarios: a) las percepciones de la ciudadanía, b) las experiencias de poblaciones que han sido directamente afectadas por contenidos falsos, c) las valoraciones de personas expertas y actores sociales relevantes, y, d) los posicionamientos programáticos de los partidos políticos que competirán por la Presidencia de la República de Costa Rica en las elecciones nacionales de 2026. Estos cuatro acercamientos ofrecen una mirada multidimensional sobre la desinformación y permiten elaborar un diagnóstico más integral de sus alcances, impactos y desafíos para el país.

Para abordar la percepción de la ciudadanía se utilizaron datos provenientes de una encuesta representativa realizada por el PROLEDI en alianza con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). La encuesta se aplicó a personas mayores de 18 años con línea de teléfono celular en el país, y se basó en un muestreo aleatorio construido a partir del marco muestral del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El PROLEDI diseñó el cuestionario y las preguntas fueron validadas con las organizaciones del proyecto CRíticaMente. Por su parte, el CIEP completó 1001 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años entre el 25 y 29 de agosto, y el 23 y 26 de septiembre de 2025, en horarios comprendidos entre las 9:00 a.m. y las 8:30 p.m. Con base en este número de entrevistas y asumiendo una máxima variabilidad en preguntas dicotómicas, se estima un error muestral máximo de ± 3 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

En la encuesta se ponderó la variable de edad y de educación para equilibrar los niveles de primaria y universitaria. En esta sección, se presenta la información de género (Figura 1), nivel educativo (Figura 2) y provincia de residencia (Figura 3) que componen la muestra finalmente analizada.

Figura 1.




Género de las personas encuestadas

Género	Sin ponderar	Ponderada	Población
Femenino	52%	52%	53%
Masculino	48%	48%	47%
Otros/ No binario	0%	0%	---

Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025 y datos del Censo Nacional 2022.

Figura 2.

Nivel educativo de las personas encuestadas

Nivel educativo	Sin ponderar	Ponderada	Población
Primaria (completa o incompleta) o menos (sin estudios)	19,9%	33,7%	 35%
Secundaria (completa o incompleta)	43,9%	41,3%	 40%
Superior (universitaria completa e incompleta) o estudios técnicos superiores	36,1%	24,8%	 25%

Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025 y datos del Censo Nacional 2022.

Figura 3.

Provincia de residencia

Provincia	Sin ponderar	Ponderada	Población
San José	28%	28%	32%
Alajuela	24%	23%	21%
Cartago	10%	10%	11%
Heredia	12%	11%	9%
Guanacaste	8%	8%	8%
Puntarenas	8%	9%	10%
Limón	10%	11%	9%

Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025 y datos del Censo Nacional 2022.

Por su parte, la percepción experta se recopiló mediante 13 entrevistas semiestructuradas dirigidas a personas investigadoras, directoras de medios de comunicación y a quienes han debido enfrentar este fenómeno desde espacios institucionales o roles de liderazgo público (Figura 4). Las entrevistas se realizaron virtualmente entre septiembre y octubre de 2025.

 **Figura 4.**

Personas expertas entrevistadas para el informe

Nombre	Cargo	Fecha
Fabrice Le Lous	Director del periódico La Nación	5/09/2025
Eduardo Ulibarri Bilbao	Exembajador ante la ONU, periodista	12/09/2025
Jimena Soto	Directora del sitio de noticias digital CRHoy	12/09/2025
Vanessa Castro	Diputada de la República de Costa Rica (2022-2026)	12/09/2025
Ana Karen Cortés	Abogada experta en datos y nuevas tecnologías	12/09/2025
Gustavo Román Jacobo	Director General de Estrategia y Gestión Político-Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica	17/09/2025
Gustavo Araya Martínez	Consultor en Comunicación Política	24/09/2025
Larissa Tristán Jiménez	Investigadora de la Universidad de Costa Rica	29/09/2025
Danilo Mora	Oficial de Comunicaciones y Advocacy en la Organización de Naciones Unidas Costa Rica	30/09/2025
Hazel Díaz	Directora de Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes de la República	8/10/2025
Henry Rodríguez	Periodista de Extra Radio, emisora del Grupo Extra	9/10/2025
Laura Chinchilla Miranda	Expresidenta de la República de Costa Rica (2010-2014)	9/10/2025
Alejandro Delgado	Magistrado	14/10/2025





Fuente: Elaboración propia.

Las preguntas realizadas tuvieron como fin comprender cómo diversos actores sociales y liderazgos perciben el problema de la desinformación, qué medidas consideran necesarias para enfrentarlo y qué papel deberían asumir las instituciones del Estado, los medios de comunicación y las plataformas digitales en la protección de la democracia y la libertad de expresión.

La percepción de las poblaciones y grupos sociales se recopiló mediante cuatro grupos focales realizados entre septiembre y octubre de 2025, con personas que se autoreconocen o pertenecen a grupos sociales que han sido afectados por la desinformación (Figura 5). En estas sesiones se exploró qué tipos de contenidos falsos han visto circular en redes sociales, cuáles son las narrativas dominantes que observa y qué impactos colectivos han experimentado. Asimismo, se indagó en las estrategias que utilizan o consideran necesarias para enfrentar la desinformación, así como en la responsabilidad que atribuyen a distintos actores en su creación, difusión y combate.

Figura 5.

Sectores con los que se realizaron grupos focales

Población	Fecha	Cantidad de participantes	
LGBTIQA+	miércoles 24 de septiembre	7	
Migrantes	lunes 29 de septiembre	2	
Mujeres Políticas	viernes 26 de septiembre	5	
Funcionariado Judicial	martes 14 de octubre de 2025	8	

Fuente: Elaboración propia.

La selección de mujeres políticas, personas LGBTIQA+ y población migrante respondió a la evidencia reciente que identifica a estos tres grupos como los principales blancos de discursos de odio y desinformación en Costa Rica. Según el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025, los ataques contra las mujeres han continuado en aumento en el país, especialmente contra aquellas que ocupan espacios de poder, lideran procesos sociales, defienden derechos humanos o enfrentan distintas formas de violencia (COES, 2025). El mismo documento advierte un alarmante crecimiento del 344% en los ataques dirigidos a personas LGBTIQA+ entre 2024 y 2025 y señala que la población migrante también se encuentra entre los grupos más frecuentemente atacados mediante odio digital y narrativas desinformativas (Mora Díaz, 2025).

El cuarto grupo seleccionado estuvo conformado por personas funcionarias del Poder Judicial de la República. Su inclusión respondió a factores coyunturales del contexto nacional. En el último año, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha abierto una confrontación pública y directa con este Supremo Poder, al que ha acusado no solo de ser el responsable de la inseguridad ciudadana nacional, sino también de ser un agente corrupto que propaga mentiras y le persigue políticamente (Sequeira, 2025; May, 2025; Muñoz, 2025; Ruíz, 2025). Según el Quinto Informe del Estado de la Justicia, la persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tiene precedentes desde, al menos, la segunda mitad del siglo XX, y constituyen una anomalía en la historia política reciente del país que busca minar la confianza en el sistema de justicia del país (Programa Estado de la Nación, 2025a). Esta dinámica, además, ha contribuido a generar un clima político hostil entre los Supremos Poderes del país (Programa Estado de la Nación, 2025b: p. 249-250).

La información generada en los grupos focales y en las entrevistas fue transcrita en su totalidad. Posteriormente, los textos fueron organizados utilizando el programa de análisis de datos cualitativos ATLAS.ti, en el cual se elaboró un conjunto de códigos vinculados a los temas de la guía de preguntas aplicada, lo que permitió agrupar la información en unidades de sentido. A partir de esta sistematización, se identificaron y analizaron las estrategias discursivas empleadas por las personas participantes. Estas estrategias, articuladas en oraciones específicas, cumplen la función de legitimar o deslegitimar acciones, prácticas sociales, eventos o actores (Reisigl y Wodak, 2001).

Para analizar las estrategias discursivas identificadas en los códigos se adoptó un enfoque basado en estrategias narrativas. Este enfoque permite examinar cómo las personas construyen y relatan sus experiencias, así como las complejidades de sus relaciones personales y sociales. Además, facilita la comprensión de la diversidad y los múltiples niveles implicados en los relatos, evitando reducirlos a entidades coherentes, naturales o unificadas (Esin, Fathi y Squire, 2014, p. 204). De igual forma, el análisis narrativo también permite indagar en lo que los relatos revelan sobre las creencias grupales y su función en la promoción de intereses colectivos, la cohesión interna o las dinámicas entre distintos grupos sociales (Carranza, 2023, p. 54). Esta estrategia discursiva se centra en los significados que las propias personas participantes generan, y aborda los contextos en los que se narran y se escuchan (Esin, Fathi y Squire, 2014, p. 205).

En conjunto, estas tres primeras perspectivas provenientes de la ciudadanía, de las personas expertas y de las poblaciones afectadas permitieron construir un análisis que integra distintas miradas sobre el problema, sus efectos y las posibles vías de respuesta.

Finalmente, el estudio también incorporó una sección dedicada al análisis de los planes de gobierno de las agrupaciones políticas que competirán en las elecciones nacionales de febrero de 2026. Para ello, se realizó un análisis documental de las posiciones programáticas de las candidaturas presidenciales en relación con la desinformación, utilizando como fuente los documentos presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y disponibles en su sitio web¹.

A partir de estos textos se elaboró una matriz de análisis basada en cuatro criterios: (1) si el documento mencionaba explícitamente la palabra "desinformación" o conceptos afines, (2) si reconocía la desinformación como un problema social o democrático, (3) si, además de mencionarla, proponía algún tipo de solución, y (4) la descripción de estas soluciones cuando estaban presentes. Esta matriz permitió realizar una comparación entre los planes de gobierno, identificar los enfoques que cada candidatura plantea y señalar las omisiones o vacíos programáticos más relevantes.

¹Se descargaron y analizaron los planes de gobierno disponibles al 15 de noviembre de 2025 en el siguiente sitio web: <https://www.tse.go.cr/2026/planesgobierno.html>

PERCEPCIONES CIUDADANAS SOBRE LA DESINFORMACIÓN

PERCEPCIONES CIUDADANAS SOBRE LA DESINFORMACIÓN

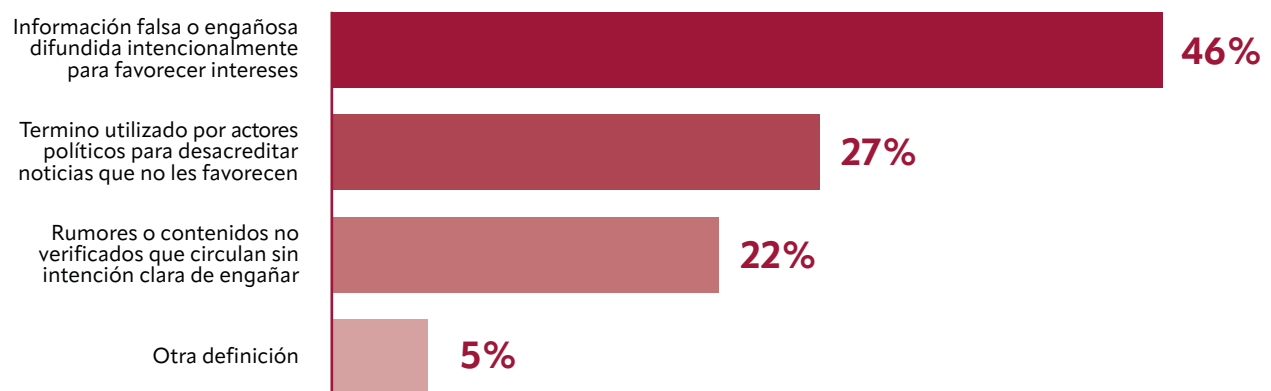
Percepción y actitudes ante la desinformación

En general, los datos obtenidos en la encuesta permiten afirmar que, en Costa Rica, la ciudadanía percibe la desinformación como un fenómeno que no solo representa una amenaza para la democracia, sino que afecta la reputación de las personas e incrementa el odio y la intolerancia. Según las personas encuestadas, se trata de un problema que debería ser sancionado y que exige fortalecer las capacidades de la población para identificar y evitar su difusión.

Al observar los datos con detalle, se evidencia que casi la mitad de las personas participantes posee un conocimiento alto sobre el significado del término (Figura 6). En concreto, el 46% de las personas indica que la desinformación corresponde a información falsa o engañosa difundida deliberadamente para favorecer intereses políticos, económicos o ideológicos. Este hallazgo revela un nivel de comprensión relativamente elevado sobre la intencionalidad que caracteriza este tipo de procesos y coincide conceptualmente con lo que han planteado instancias como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos (Comisión Europea, 2018; Colomina Saló y Pérez-Soler, 2018; Organización de los Estados Americanos, 2019).

Figura 6.

¿Qué entienden las personas por “desinformación”?



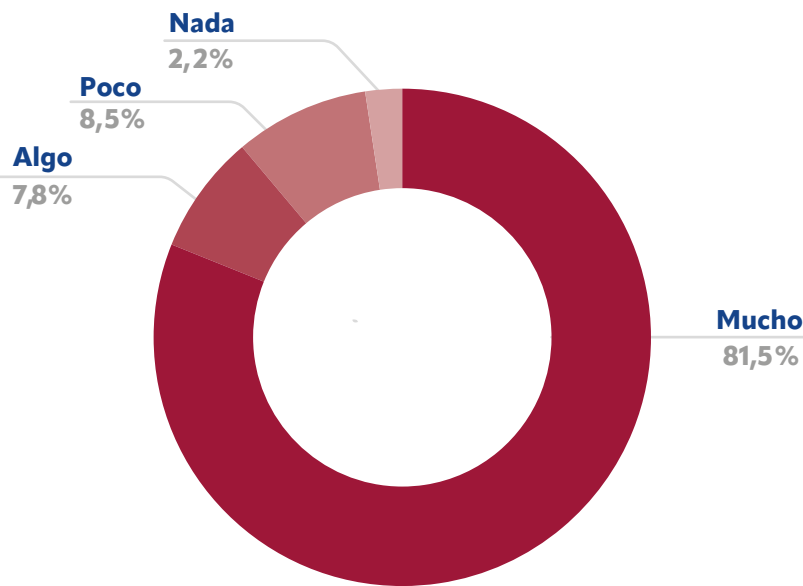
Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

Aunque la definición más extendida vincula el concepto con la difusión deliberada de falsedades, el 27% de las personas encuestadas considera que el término es un recurso discursivo utilizado por políticos para desacreditar informaciones que no les resultan favorables. Por su parte, el 22% de las y los encuestados lo asocia a la circulación de rumores o contenidos no verificados sin una intención clara de engañar, lo que puede evidenciar que una parte de la población tiende a interpretar el fenómeno desde un enfoque menos intencional y más cotidiano.

Independientemente del significado que cada persona asigne al concepto, existe una percepción mayoritaria de que se trata de un asunto preocupante. Cuando se consulta en qué medida consideran que la desinformación es un problema en el país, el 81,5% responde "mucho", mientras que solo un 2,2% indica "nada" (Figura 7).

Figura 7.

¿La desinformación es un problema en el país?



Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

Además de considerarlo un problema para el país, los datos también indican que las personas muestran una percepción muy crítica sobre el fenómeno. Esto se evidencia con los niveles de acuerdo que existen en torno a una serie de frases que se sometieron a consulta (Figura 8). Por ejemplo, el 87% de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que la "desinformación es una amenaza para la democracia" y la misma cifra de consenso existe en torno a la afirmación de que "debe sancionarse la publicación y difusión de desinformación".

En el mismo sentido, la encuesta revela que la desinformación se percibe como un fenómeno con el potencial de afectar tanto la vida personal como los vínculos sociales y la convivencia democrática, trascendiendo así el ámbito meramente informativo o comunicativo. Esto se corrobora con el hecho de que el 97% de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo con la frase de que la "desinformación puede dañar la reputación de personas inocentes". Una casi idéntica se manifiesta de acuerdo con la afirmación de que este tipo de contenidos puede aumentar el odio y la intolerancia (Figura 8).

Además de las percepciones sobre los impactos y la gravedad del fenómeno, la encuesta también exploró cómo las personas valoran su capacidad y la de las otras para hacer frente a este problema. Los resultados muestran que, aunque la mayoría reconoce una responsabilidad colectiva de aprender a identificar contenidos desinformativos para no difundirlos, existe una brecha significativa entre la confianza personal y la confianza en los demás.

El 73% de las personas encuestadas confía en su propia capacidad para identificar contenidos falsos, pero esa confianza disminuye significativamente cuando se trata de los demás. En este caso, solo el 34% expresa el mismo nivel de acuerdo respecto a la habilidad de otras personas para reconocer la desinformación (Figura 8). Esta diferencia de casi 40 puntos porcentuales muestra que las personas encuestadas piensan que “los otros” son más susceptibles a ser engañados.

Figura 8.

Niveles de acuerdo con afirmaciones vinculadas a la desinformación

 Acuerdo	Afirmación	Desacuerdo 
87%	La desinformación es una amenaza para la democracia	13%
87%	Debe sancionarse la publicación y difusión de desinformación	13%
97%	La desinformación puede dañar la reputación de personas inocentes	3%
96%	La desinformación puede aumentar el odio y la intolerancia	4%
91%	Las personas deben aprender a reconocer la desinformación para no compartirla	9%
73%	Confío en mi capacidad para identificar contenidos falsos	27%
34%	Confío en la capacidad de los demás personas para identificar contenidos falsos	66%

Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

Subestimar el impacto que los contenidos mediáticos tienen sobre uno mismo, pero sobrestimar al mismo tiempo el efecto que tiene sobre las demás personas es algo que se puede leer bajo la tesis del “efecto de la tercera persona”.

Se trata de una tesis sostenida por Davison (1983) que, en palabras sencillas, señala que las personas se perciben menos vulnerables que los demás a la influencia de los medios. Este efecto suele generar una distancia simbólica entre la propia capacidad crítica y la supuesta credulidad ajena, y tiende a reforzar la idea de que la desinformación es un problema de los otros y no propio. Como resultado, disminuye la disposición individual a cuestionar los propios hábitos informativos o a verificar la información que se consume y se comparte.

Consumo y propagación de los contenidos

El estudio realizado también examinó temas vinculados con el consumo y difusión de contenidos informativos. Con ello, la idea era comprender cómo las personas perciben la presencia de este problema en su vida cotidiana, así como sus percepciones sobre quiénes son los principales responsables de su propagación.

El 87,2% de las personas se encuentran preocupadas de que la desinformación o los contenidos falsos afecten las elecciones que Costa Rica desarrollará el próximo febrero (Figura 9). Este dato resulta especialmente relevante porque pone en evidencia la creciente conciencia ciudadana sobre los riesgos que la desinformación representa para los procesos democráticos, en particular para la formación de opinión y la toma de decisiones electorales informadas.

Figura 9.

¿Le preocupa que la desinformación o los contenidos falsos afecten las próximas elecciones?



Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

Por otro lado, solo el 28% de las personas responde afirmativamente cuando se les pregunta si, recientemente, han confiado y creído en algún contenido que posteriormente resultó ser falso. Por tanto, el 72% restante indica no haber sido víctima de la desinformación (Figura 10). En general, se trata de un resultado positivo si se consideran los niveles de peligrosidad que las mismas personas atribuyen a este problema en términos democráticos y de convivencia pública.

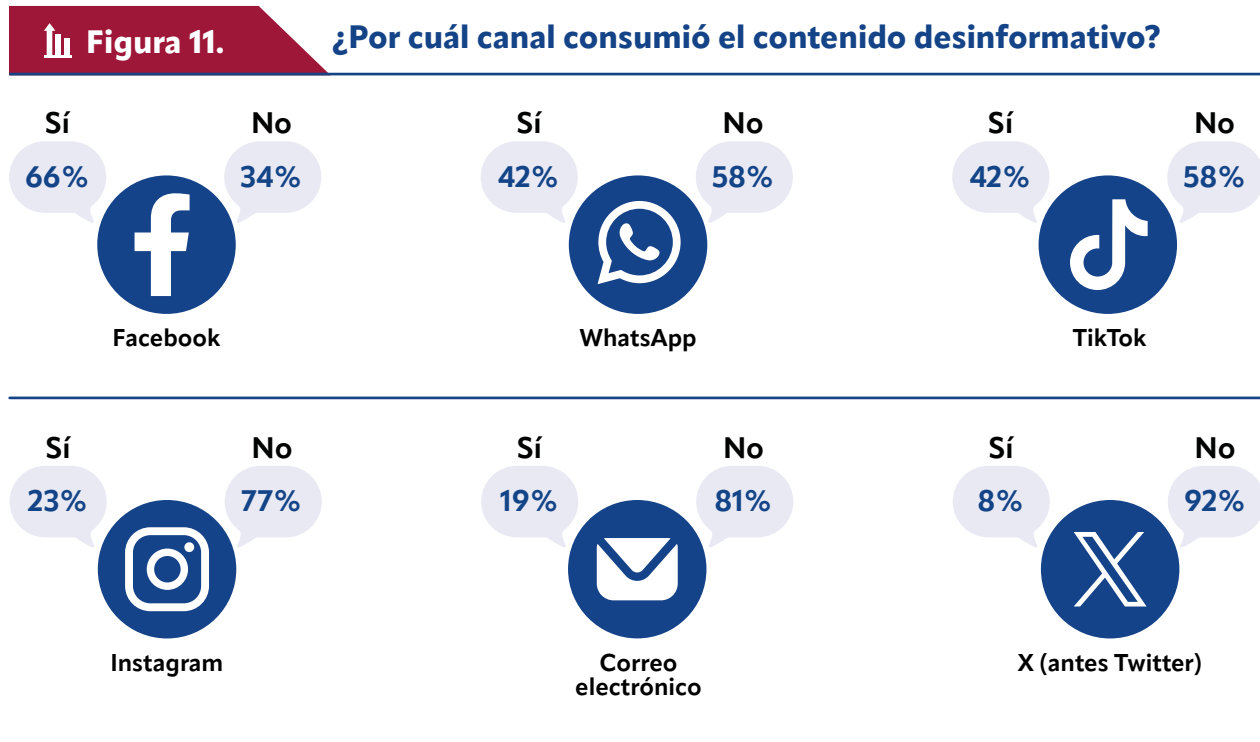
Figura 10.

¿Ha creído y confiado recientemente en algún contenido que después resultó ser falso?



Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

A quienes respondieron haber sido víctimas de estos contenidos se les consultó por los canales donde observaron esa desinformación (Figura 11). Los resultados muestran que Facebook fue el canal o plataforma donde más personas consumen contenido falso con un 66% de respuestas positivas, seguido de WhatsApp y TikTok con un 42%. En tercer lugar, se encuentra Instagram con 23% de respuestas positivas.



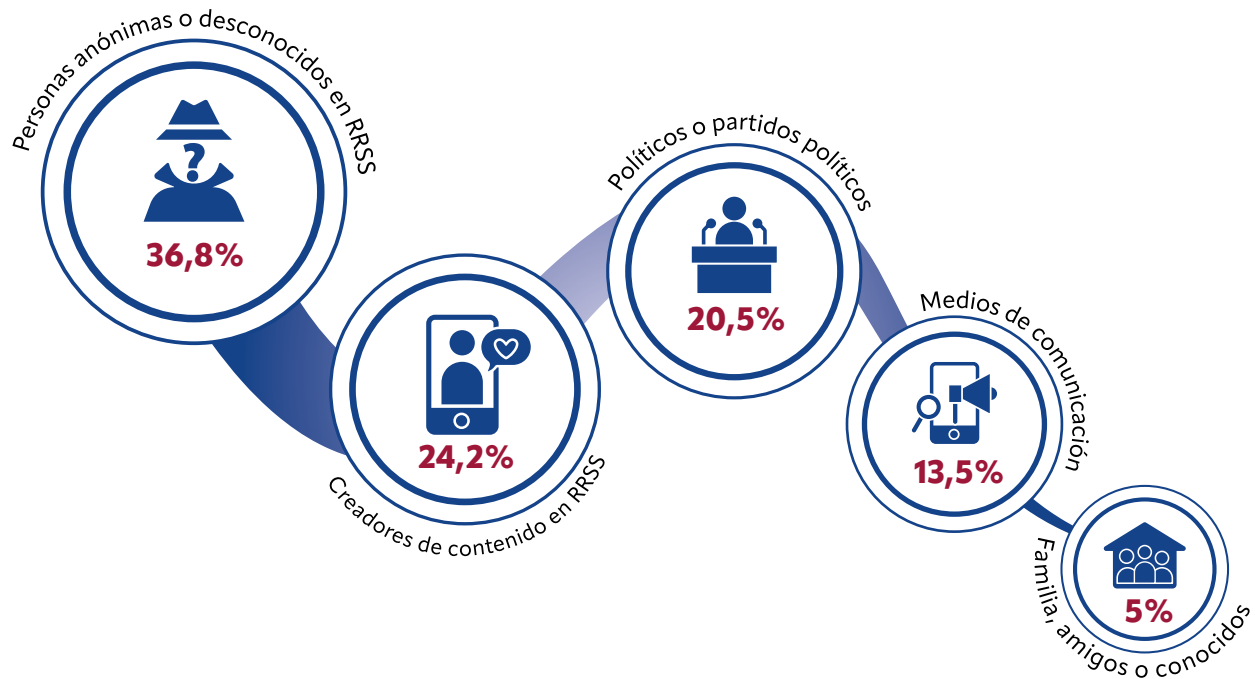
Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

Evidentemente, estos resultados deben leerse teniendo en consideración los niveles de penetración de cada espacio digital. En Costa Rica, Facebook es la red social más utilizada y el 98% de la población utiliza WhatsApp como plataforma de mensajería de texto (Brenes Peralta, Siles y Tristán Jiménez, 2024). Esto implica que la exposición a contenidos falsos ocurrió en los espacios digitales de mayor uso cotidiano entre las y los costarricenses. Por el contrario, X es solo utilizada por el 17% de las personas lo que hace que los contenidos desinformativos ahí expuestos tengan, en principio, un impacto más limitado (Brenes Peralta, Siles y Tristan Jimenez, 2024).

Ahora bien, al interpretar estos datos es importante considerar que las plataformas digitales por donde circulan estos contenidos presentan fronteras porosas y dinámicas, lo que impide que funcionen como espacios aislados. Esta interconexión entre redes y aplicaciones facilita que un contenido desinformativo, originalmente surgido en una de ellas, se traslade con rapidez a otras, amplificando su alcance y su capacidad de propagación. En este contexto, la desinformación adquiere un carácter ubicuo y difícil de contener, pues circula de manera simultánea y entrelazada en múltiples entornos digitales.

Finalmente, también se consultó por la responsabilidad en torno a la desinformación. En este tema, los resultados muestran que la ciudadanía le adjudica a actores que no conocen personalmente la responsabilidad de ser los mayores difusores de mentiras (Figura 12). Por ejemplo, el 36,8% indica que las personas anónimas o desconocidas en redes sociales son quienes con mayor frecuencia difunden este tipo de contenidos. A ellos, les siguen los influencers o creadores de contenido con un 24,2%.

Figura 12. ¿Qué actores difunden con mayor frecuencia desinformación?



Fuente: Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

La posición crítica frente a la política y los medios se ve en el hecho de que estos actores son nombrados en cuarta y quinta posición de las respuestas, con un 20,5% y 13,5% respectivamente. Finalmente, las personas consideran a sus familiares, amigos o conocidos como las fuentes que menos difunden contenidos falsos. Estas percepciones, aunque puedan coincidir o no con la realidad, muestran que la ciudadanía tiende a atribuir la responsabilidad de la desinformación a actores externos y con mayor visibilidad pública, mientras minimiza el papel que podrían tener sus propios entornos cercanos en la reproducción de estos materiales.

Este patrón coincide con lo comentado previamente en torno al “efecto de la tercera persona” y sugiere que la desinformación se continúa concibiendo como algo que proviene de “afuera” más que como un problema que también puede encontrarse presente en las redes cotidianas de confianza como la familia, las amistades o las personas cercanas. En ese sentido, se puede crear cierta distancia simbólica frente al problema, y podría ser un obstáculo para generar conciencia de que todos nuestros círculos pueden ser susceptibles de contenidos falsos que buscan incidir sobre nuestras posiciones.

Análisis multifactorial sobre la percepción de la desinformación

Del análisis de las respuestas presentadas en las secciones anteriores se desprende que la población costarricense concibe la desinformación como un fenómeno que pone en riesgo la democracia, fomenta el odio y puede perjudicar la reputación de las personas. Asimismo, se observa un amplio respaldo a que la ciudadanía aprenda a identificar la desinformación para evitar su propagación y ser manipulada por ella. Esta sección toma varias de esas preguntas y estudia si hay variables como el nivel educativo, el ingreso, el género, la edad o la identidad política que estuvieran relacionadas, de forma estadísticamente significativa, con dichas posturas, especialmente cuando se consideran de manera conjunta.

En términos prácticos, se busca responder preguntas como: ¿existe alguna relación entre el género y la autopercepción de la capacidad para reconocer desinformación? ¿Se observan diferencias según el nivel educativo en las posturas sobre las consecuencias de la desinformación? ¿Están vinculadas las orientaciones o posturas políticas con las posiciones sobre la desinformación?

Para llevar a cabo este análisis se utiliza un modelo de regresión lineal aplicado a variables que tienen dos posibles respuestas (como "sí/no" o "de acuerdo/en desacuerdo", conocidas como variables dicotómicas). Este método de estimación es también denominado modelo de probabilidad lineal. El modelo compara a personas con características similares para estimar cómo el cambio en una variable, como el nivel educativo o género, está vinculado con sus opiniones sobre su concepción o posturas acerca de la desinformación.

El modelo utiliza un total de siete preguntas como variables dependientes, las cuales se recodifican en dos posibles respuestas: i) de acuerdo o neutral y ii) en desacuerdo. Las seis primeras variables corresponden a (1) si la persona considera si la desinformación o difusión de contenidos falsos es un problema en el país, (2) si representa una amenaza para la democracia, (3) si la población debe aprender a reconocerla para no compartirla, (4) si puede dañar la reputación de personas inocentes, (5) si puede aumentar el odio y la intolerancia, y (6) si confía en su propia capacidad para identificar contenidos falsos. La séptima variable indica si la persona ha creído o confiado recientemente en algún contenido que luego resultó ser falso, con "sí" y "no" como opciones de respuesta.

Como variables independientes para evaluar su correlación con las variables anteriores, se incluye género, edad, provincia de procedencia, ingreso relativo, nivel educativo y dos indicadores de identidad política: la calificación que las personas otorgan a la gestión del presidente y la percepción sobre si las instituciones públicas tienen la capacidad de mejorar la vida de la gente. A continuación, cuando se mencionan diferencias o probabilidades estadísticas, estas son significativas a un nivel del 5%.

Relación entre características de las personas y sus opiniones

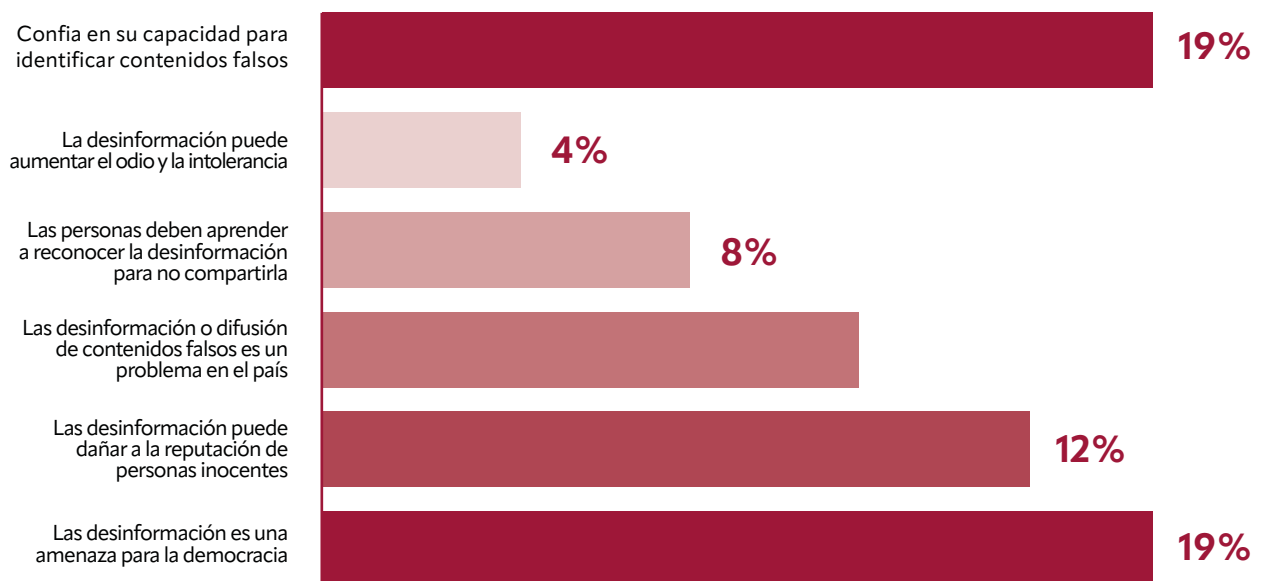
Los resultados muestran de forma consistente que el nivel educativo juega un papel importante en cómo las personas perciben y entienden la desinformación (Figura 13). Quienes tienen educación universitaria, en comparación con quienes cuentan con educación primaria o menos, tienen una probabilidad significativamente mayor de estar de acuerdo con los enunciados sobre que la desinformación es un problema serio para el país y la democracia, que puede causar daños reputacionales a terceros, y que es importante el desarrollo de habilidades para reconocerla y evitar su difusión.

En términos concretos, **la educación superior se asocia con:**

1. Mayor sensibilidad al problema de la desinformación (12 puntos porcentuales más).
2. Mayor percepción de riesgo democrático (19 puntos porcentuales más).
3. Más acuerdo en que las personas deben aprender a identificarla (8 puntos porcentuales más).
4. Más conciencia del daño a la reputación de personas inocentes (16 puntos porcentuales más).
5. Mayor reconocimiento de que puede aumentar el odio y la intolerancia (4 puntos porcentuales más).
6. Mayor confianza en su capacidad para detectar contenidos falsos (19 puntos porcentuales más).

Figura 13.

Diferencia en puntos porcentuales en el acuerdo con afirmaciones sobre desinformación: comparación entre personas con educación universitaria y aquellas con educación primaria completa o incompleta



Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Encuesta de Opinión Pública PROLEDI-CIEP 2025.

Estos resultados no son exclusivos de la población con educación universitaria. Cuando se compara a las personas con algún nivel de secundaria con aquellas que cuentan con educación primaria o menos, quienes poseen educación secundaria muestran una mayor probabilidad de estar de acuerdo en que la desinformación o difusión de contenidos falsos es un problema en el país (8,5 pp), en que representa una amenaza para la democracia (9 pp) y en que confían en su capacidad para identificar contenidos falsos (15 pp). En conjunto, estos hallazgos sugieren que la educación, en todos sus niveles, no solo influye en la capacidad de identificar información falsa, sino también en la valoración del riesgo que representa y en la importancia de desarrollar competencias para enfrentarla.

Por otro lado, las personas que creen que las instituciones públicas pueden mejorar la vida de la población tienden a percibir la desinformación como un riesgo mayor. En comparación con quienes no comparten esta opinión, son 7 puntos porcentuales más propensas a considerar que la desinformación representa una amenaza para la democracia y 20 puntos porcentuales más propensas a afirmar que puede dañar la reputación de la gente. Este patrón podría deberse a que quienes confían más en las instituciones suelen mostrar mayor interés por los asuntos públicos y, en consecuencia, mayor sensibilidad hacia fenómenos que puedan afectar la convivencia democrática.

Por último, cabe destacar que los hombres son 8 puntos porcentuales más propensos a reportar confianza en su capacidad para detectar contenidos falsos en comparación con las mujeres. En esta misma pregunta, la variable de ingreso relativo también muestra diferencias estadísticamente significativas: al comparar a quienes reportan que su ingreso no les alcanza y enfrentan grandes dificultades con quienes indican que les alcanza y pueden ahorrar, las primeras son 12 puntos porcentuales más propensas a no confiar en su capacidad para distinguir contenidos falsos.

Estos resultados sugieren que tanto el género como la situación económica influyen en la autopercepción sobre la capacidad de identificar desinformación. Mientras los hombres tienden a mostrar mayor confianza, las personas con mayores dificultades económicas se perciben menos capaces, lo que podría reflejar desigualdades en acceso a información, o habilidades digitales que faciliten la detección de contenidos falsos. Ambos resultados invitan a un análisis más profundo en estudios futuros para entender mejor los factores que determinan la percepción de capacidad frente a la desinformación.

Por último, cabe señalar que, en la pregunta sobre si recientemente han creído en algún contenido que luego resultó ser falso, ninguna de las variables incluidas en el modelo mostró efectos estadísticamente significativos. Aunque un 28% de las personas encuestadas reportó haber experimentado esto, no se observaron diferencias sistemáticas según edad, nivel educativo, ingreso o valoración sobre la gestión del gobierno. Este hallazgo sugiere que la experiencia de haber caído en desinformación es relativamente transversal en la población y no parece concentrarse en grupos específicos. En otras palabras, con base en las variables analizadas, todas las personas se encuentran en niveles similares de riesgo, lo cual refuerza la idea de que la desinformación es un fenómeno que puede afectar a cualquiera, independientemente de su perfil sociodemográfico.

LA VISIÓN DE LOS GRUPOS Y POBLACIONES AFECTADAS

LA VISIÓN DE LOS GRUPOS Y POBLACIONES AFECTADAS

Si bien la experiencia de haber creído en una falsedad deliberadamente fabricada parece distribuirse de manera relativamente homogénea en la población, esto no implica que los efectos de la desinformación sean igualmente uniformes. El riesgo de caer en un contenido falso puede ser transversal, pero las consecuencias y la intensidad de los ataques no lo son. Algunos grupos se convierten en blancos preferentes de estas dinámicas. Por ello, esta investigación también buscó aproximarse a las experiencias de poblaciones y sectores que han sido objeto recurrente de campañas de desinformación para comprender cómo estos impactos se manifiestan de manera diferenciada.

En esa línea, como se expuso en la sección metodológica, este estudio tomó como referencia a las mujeres políticas, las personas migrantes, la comunidad LGBTIQ+ y las personas funcionarias del Poder Judicial como ejemplos de algunos de los grupos y poblaciones que se han visto particularmente afectadas por este fenómeno. A partir de esta selección, se analizaron las estrategias narrativas dominantes de desinformación dirigidas a estos grupos y sus efectos, así como los actores que construyen, distribuyen o silencian estos contenidos, los cuales, en estos casos, suelen entrelazarse con discursos de odio.

Narrativas dominantes de desinformación

Para el análisis de las narrativas dominantes relacionadas con la desinformación se tomaron temas centrales como los formatos, las ideas falsas que circulan en torno a estos grupos y la percepción que tienen con respecto a la circulación de estos contenidos.

Las personas participantes de los grupos focales coinciden en que los videos son el formato más común para divulgar contenidos desinformativos. También reconocen otros formatos frecuentes, como textos, imágenes y memes, que se utilizan para propagar mensajes falsos.

En cuanto a los espacios donde circulan estos contenidos, señalan que las principales plataformas son Instagram, Facebook, WhatsApp y TikTok. Según lo expresado en estas sesiones, TikTok se percibe como una de las redes donde la desinformación se difunde con mayor intensidad en la actualidad.

Además de los formatos y los espacios donde circula, también describieron los contenidos de la desinformación, es decir, las narrativas y mensajes que se construyen contra cada grupo (Figura 14).

En este ámbito, las personas migrantes nicaragüenses perciben que los contenidos desinformativos sobre esta población han aumentado y que suelen promover discursos de odio que se han naturalizado tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Las ideas falsas que circulan con mayor frecuencia las vinculan con la criminalidad y con la supuesta usurpación de servicios públicos como la educación o la salud. Además, existe una tendencia a atribuir crímenes a personas nicaragüenses o colombianas debido a prejuicios que asocian a ambos países con actividades delictivas. En el caso de las mujeres colombianas, circulan también narrativas falsas relacionadas con cirugías estéticas o con aspectos de su sexualidad.

Para las personas LGBTIQ+, la desinformación que ellas sufren se entrelaza con el fanatismo religioso y con discursos populistas que exacerban estigmas preexistentes. Los contenidos desinformativos que han observado buscan presentarles como una amenaza para las niñeces, especialmente a través de narrativas que acusan falsamente a personas trans o Drag Queens de “pervertir” o poner en riesgo a personas menores de edad. Además, también buscan colocar a la población como enemiga de los “valores sociales”.

Por su parte, las mujeres políticas participantes denuncian la circulación de videos manipulados contruidos a partir de tomas seleccionadas que descontextualizan por completo lo que realmente hicieron o dijeron. Este tipo de contenido produce versiones parciales de sus discursos y titulares maliciosos orientados a resaltar supuestas disfuncionalidades institucionales. Las ideas falsas que circulan sobre ellas buscan deslegitimar su trabajo político, reproducir estereotipos vinculados a sus cuerpos o insinuar que son “títeres” de algún hombre, cuestionando así sus méritos y capacidades.

De manera similar, las personas representantes del Poder Judicial señalan que un tipo frecuente de contenido desinformativo en su contra es la difusión de pequeños extractos de sentencias o resoluciones con el fin de tergiversar los hechos. Entre las ideas falsas más extendidas se encuentran aquellas que aseguran que benefician a grupos poderosos para mantener su estatus quo, que existen “redes de cuidado” destinadas a proteger a quienes cometen delitos de cuello blanco o que la institución ha sido infiltrada por el crimen organizado. También circulan narrativas que les adjudican la responsabilidad por la inseguridad del país y que los presentan como un sector privilegiado que aporta poco a la sociedad.

 **Figura 14.**

Vínculos que establecen los contenidos desinformativos según las poblaciones



Personas migrantes nicaragüenses

Asociación con criminalidad, amenaza y usurpación de servicios; discursos de odio normalizados en redes y medios.



Personas LGBTIQ+

Mezcla de fanatismo religioso y discursos populistas que los presentan como riesgo para las niñeces y la moral social.



Mujeres políticas

Videos y frases descontextualizadas para deslegitimar su labor; estereotipos sobre sus cuerpos y supuesta dependencia de hombres



Personas funcionarias del Poder Judicial

Fragmentación y tergiversación de sentencias para acusarlos de favorecer a élites, proteger delitos de cuello blanco o contribuir a la inseguridad.

Fuente: elaboración propia, a partir de grupos focales.

Efectos observados y percibidos

La desinformación no solo tiene efectos en el ámbito público, también impacta la vida privada de las personas y sus cotidianidades.

En este tema, las personas migrantes señalan que la desinformación afecta directamente la autopercepción que tienen sobre sí mismas como personas con derechos y con garantías en el país. Relatan que los contenidos desinformativos les hace cuestionarse si realmente tienen derecho de acceder a los servicios de salud o al sistema educativo. Además, también expresan que se ven en la necesidad de cambiar aspectos propios de su nacionalidad, como por ejemplo su acento, para que no se les reconozca como personas migrantes y, por tanto, se les relacione con estereotipos construidos socialmente a partir de la divulgación de contenidos falsos.

Por su parte, las personas LGBTIQ+ señalan que la desinformación y los discursos de odio asociados a ella generan un ambiente hostil que las lleva, en muchos casos, a retirarse de espacios digitales y mantener distancia para no sentirse afectadas. Explican que la agresividad de los comentarios, la repetición de estigmas y la presencia de perfiles anónimos o muy ideologizados hacen que participar en discusiones o intentar desmentir información falsa resulte emocionalmente desgastante e incluso riesgoso. Como consecuencia, muchas personas optan por no intervenir en debates públicos, limitar su presencia en redes sociales o evitar por completo ciertos contenidos, lo que refuerza su sensación de vulnerabilidad y reduce sus posibilidades de expresión en los entornos digitales.

De manera similar, en el caso de las mujeres políticas, la circulación de contenidos desinformativos tiene efectos inhibitorios. Varias participantes indican que han dejado de pronunciarse sobre temas relacionados con los derechos humanos debido a las amenazas, incluidas amenazas de muerte, que reciben tanto ellas como sus familias a partir de publicaciones falsas o manipuladas. Para ellas, la desinformación está edificando silencios en torno a la lucha por los derechos humanos, además de disuadir la participación de otras mujeres en la política.

Por su parte, las personas funcionarias del Poder Judicial señalan un cambio notable en el trato de quienes acuden a sus servicios, pues con frecuencia llegan con actitudes defensivas e incluso agresivas o graban las conversaciones. Esta situación ha generado miedo y temor en quienes laboran en la institución al momento de brindar atención.

Figura 15.

Principales efectos percibidos de los contenidos desinformativos en los grupos participantes

Violación a los derechos humanos.
Negación o invalidez de sus identidades.
Reproducción de estereotipos.
Incremento de distintas formas de violencia.
Aparición de conductas agresivas por parte de terceras personas.

Fuente: elaboración propia, a partir de grupos focales.

¿Quién produce, quién amplifica y quién calla?

Comprender los efectos de la desinformación requiere, además, identificar a los actores que la generan, la propagan o permiten su circulación. Las percepciones recogidas en los grupos focales muestran que las poblaciones afectadas no solo reconocen los formatos y contenidos de los mensajes falsos, sino que también han construido lecturas sobre las personas, grupos y redes que intervienen en su producción y amplificación, así como sobre quienes se benefician de ellos o guardan silencio ante su impacto.

Las personas participantes consideran que quienes comparten desinformación suelen ser hombres y mujeres mayores, con contenidos que carecen de contexto y no incluyen versiones de las fuentes principales. Un hallazgo relevante es que, en ocasiones, la desinformación circula incluso dentro de sus propios entornos laborales, donde se reproducen rumores infundados. Además, describen a esos emisores como personas polarizadas o fanatizadas que recurren a “granjas de troles” y a ciertas figuras públicas para amplificar mensajes falsos.

Asimismo, en todos los grupos focales se señala la existencia de una “red” que opera de manera coordinada, difundiendo mensajes calculados según la coyuntura y las oportunidades del momento para inundar las plataformas digitales con desinformación. Desde la perspectiva de las personas participantes, esta maquinaria responde a una metodología planificada y cuidadosamente articulada, diseñada para deslegitimar y perjudicar a personas funcionarias públicas, instituciones, figuras políticas y poblaciones específicas.

En cuanto a quiénes resultan beneficiados, las personas participantes coinciden en que la desinformación favorece a los gobiernos de turno, pues contribuye a limitar los espacios de ciertos grupos y se articula con granjas de troles y vocerías públicas que intimidan y buscan inhibir la participación política. También observan que estas dinámicas favorecen a sectores cercanos al fabricismo y al chavismo, caracterizados por posiciones religiosas, dogmáticas y populistas. En este sentido, los principales responsables de la desinformación en el país, según las personas participantes, son algunos medios de comunicación, el presidente de la República y el Gobierno.

VALORACIONES DE PERSONAS EXPERTAS Y LIDERAZGOS

VALORACIONES DE PERSONAS EXPERTAS Y LIDERAZGOS

El análisis cualitativo de las estrategias narrativas presentes en las entrevistas permite identificar cómo una serie de personas expertas y diversos liderazgos sociales y políticos perciben la desinformación en Costa Rica. Sus testimonios revelan que este fenómeno no solo es entendido como un riesgo abstracto, sino como una amenaza multidimensional para el sistema democrático que ya está provocando consecuencias visibles en diversos procesos.

De igual forma, sus respuestas permiten reflexionar sobre el abordaje institucional frente a este problema, así como señalar los riesgos emergentes asociados a la aceleración tecnológica y a la evolución de las prácticas desinformativas.

La desinformación como una amenaza multidimensional

A partir del análisis de las entrevistas es posible identificar los distintos tipos de amenazas que los contenidos desinformativos representan para la democracia costarricense (Figura 16). Los testimonios muestran que la desinformación constituye una amenaza multidimensional que afecta simultáneamente la deliberación democrática (amenaza al debate público), la convivencia (amenaza social), la confianza en las instituciones del Estado (amenaza institucional) y la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas (amenaza a la agencia ciudadana).

Figura 16.

Tipos de amenazas para la democracia derivadas de la desinformación

Amenaza al debate público: degrada la conversación pública y debilita el intercambio basado en hechos

Amenaza social: fomenta el odio y deteriora la convivencia democrática.

Amenaza institucional: erosiona la confianza en medios de comunicación y órganos de control del poder.

Amenaza a la agencia ciudadana: distorsiona la toma de decisiones, debilita la participación informada y afecta la formulación de políticas públicas.

Fuente: elaboración propia, a partir de entrevistas a personas expertas.

Las diversas dimensiones de amenaza que suponen este fenómeno evidencia que se trata de un problema grave, con la capacidad de tener efectos nocivos sobre todo el sistema democrático.

Según las entrevistas, la desinformación es una amenaza al debate público porque no solo impide la circulación de información veraz, sino que también tiene el potencial de degradar la conversación democrática. Cuando la deliberación entre personas es intoxicada con mentiras, se puede reducir sustancialmente la capacidad de llegar a acuerdos y de controlar el poder, en tanto dichas prácticas sólo pueden ocurrir eficazmente cuando se realiza sobre la base de datos ciertos y de hechos irrefutables.

Varias de las personas señalan que esta degradación puede facilitar la propagación de insultos, los ataques personales y las campañas de desprestigio. Además, puede expulsar las voces de quienes intentan aportar argumentos basados en evidencia, generando con ello un silenciamiento de las voces moderadas y una ocupación de los debates por los actores más extremos y menos informados.

De las entrevistas también se desprende que la desinformación representa una amenaza social, en tanto funciona como combustible para el odio y el deterioro de la convivencia. Varios de los testimonios señalan que, en Costa Rica, los contenidos desinformativos incrementan la tensión social y siembran animadversión y sentimientos de rechazo hacia individuos, instituciones y grupos específicos, afectando así la convivencia democrática.

El material analizado también muestra que existe una percepción de que la desinformación constituye una amenaza institucional, en tanto debilita la legitimidad, la credibilidad y la capacidad operativa de las instancias públicas. Varias de las personas entrevistadas señalan que los contenidos falsos que buscan desacreditar deliberadamente a las instancias que están encargadas de producir información verificada como la prensa, las instituciones o los órganos de control tienen el potencial de corroer la confianza pública en su labor.

En el mismo sentido, se advierte que el país enfrenta una época particularmente compleja con respecto a esta amenaza, ya que la desinformación ha puesto en la mira a instituciones como la Contraloría General de la República (CGR) o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las cuales son fundamentales en nuestro sistema democrático. En el caso del TSE, la amenaza adquiere una dimensión crítica, en tanto la desinformación puede estar pensada para deslegitimar, de previo, los resultados electorales y percepciones infundadas de fraude con el fin de activar movilizaciones que comprometan la estabilidad política.

Desde otra arista, las entrevistas también resaltan que la desinformación puede distorsionar la percepción de la realidad, de modo que la ciudadanía termine actuando y decidiendo con base en creencias erróneas, visiones manipuladas o narrativas diseñadas para influir en su conducta. Lo grave, para las personas participantes, es que esto puede ocurrir no solo en temas cotidianos sino también en decisiones políticas relevantes vinculadas a la posición frente a políticas públicas, la participación en procesos electorales o la evaluación del desempeño institucional.

Si se sigue la tesis planteada por Habermas (1987, 1992), esta situación afecta de manera sustantiva la posibilidad de una deliberación democrática efectiva, pues solo puede ejercerse si la ciudadanía accede a información verificable y libre de distorsiones. Bajo esta perspectiva, la capacidad de ejercer agencia y control democrático también se ve comprometida, en tanto la desinformación opera como una distorsión sistemática que altera el proceso deliberativo y erosiona la legitimidad institucional.

Las primeras fracturas: impactos en curso de la desinformación

Ahora bien, las personas entrevistadas consideran que no se trata solo de amenazas posibles, sino que ya existen impactos de la desinformación en el país. Según sus testimonios, este fenómeno ya está alterando la discusión pública, debilitando la confianza en las instituciones y profundizando la polarización social. Tras el análisis, es posible clasificar las afectaciones en seis consecuencias visibles y que ya se encuentran en curso en el país (Figura 17).

 **Figura 17.**

Consecuencias visibles de la desinformación en Costa Rica



Fuente: elaboración propia, a partir de entrevistas a personas expertas.

En primer lugar, las personas entrevistadas identifican la confusión informativa como una consecuencia ya instalada en la vida cotidiana. Según relatan, esta se manifiesta en la forma en que la gente se informa, conversa y toma posición sobre los asuntos públicos. Varias personas entrevistadas señalan explícitamente que los contenidos falsos están manipulando la opinión pública y han llevado a muchas personas a “desconocer el contexto real” al momento de informar u opinar.

Esta confusión ha instalado una incertidumbre creciente sobre lo que es real y lo que es ficción, provocando una frontera cada vez más difusa entre verdad y mentira. Los actores sociales y liderazgos no describen esto como un fenómeno abstracto, sino como algo que ya ven en sus entornos inmediatos. Por ejemplo, personas que no saben en qué fuente confiar, que se enfrentan a versiones contradictorias sobre un mismo hecho y que tienen dificultades para establecer qué está sustentado en hechos empíricamente comprobables y que no.

Estos comentarios evidencian un escepticismo extremo que se resume en la frase “ya nadie cree en nada” formulada por una de las personas entrevistadas. Este escepticismo provoca una actitud generalizada de incredulidad hacia casi toda fuente, así como una reconfiguración de las jerarquías de confianza que facilita que los mensajes falsos o sin sustento no solo circulen sino que también sean creídos, pues alcanzan un nivel de aceptación similar al de las noticias producidas por medios formales o a las informaciones basadas en hechos.

Por otro lado, la desconfianza y el desgaste de las instituciones es otra consecuencia de la desinformación. A juicio de las personas participantes en las entrevistas, ya es posible observar actualmente una erosión en la confianza hacia las instituciones públicas. Este desgaste se ha logrado promoviendo narrativas falsas o simplificadas sobre el Estado que circulan ampliamente, y que han asentado la idea de que la institucionalidad democrática no funciona, de que ninguna instancia pública sirve o que todas tienen altísimos grados de corrupción.

Este desgaste institucional aludido en las entrevistas se observa empíricamente en los resultados de las encuestas de opinión pública que realiza periódicamente el CIEP de la UCR. En estos estudios se le pide a las personas una valoración o nota sobre la labor que realizan diversas instancias públicas, y los resultados siempre son negativos. Por ejemplo, en la encuesta realizada en septiembre de 2025, solo dos entidades superaron los 7 puntos: la Universidad de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial (CIEP, 2025).

La desmovilización ciudadana y el debilitamiento de la participación es otra de las consecuencias señaladas. En este caso, varias de las citas indican que la confusión informativa y la desconfianza institucional generadas por la desinformación provoca que una parte de la población se aleje de la vida pública. En palabras de una de las personas participantes, son factores que "alimentan, todavía más, el sentimiento de lejanía de la población con todo lo político y la política". Además, aceleran el proceso de retirada ciudadana que, para muchos de ellos y ellas, ya estaba en marcha.

Finalmente, las personas entrevistadas indican dos consecuencias adicionales: la polarización política y las manifestaciones de violencia. En el caso de la primera, los testimonios señalan que no se trata de un fenómeno nuevo. No obstante, la desinformación la intensifica y la vuelve más tóxica.

Varias de las personas señalan que los contenidos falsos alimentan una narrativa simplificada y maniquea que genera una visión binaria del mundo, la cual divide a la sociedad entre "buenos y malos" o entre personas del "pueblo" y personas de las "élites". El fin último de esta visión simplista, según anotan, es reducir la complejidad política a posiciones morales absolutas que faciliten la creación de lealtades políticas basadas en emociones fuertes, y no en información.

Esta lógica binaria no opera en abstracto. Las entrevistas subrayan que ciertos liderazgos han sabido capitalizarla para consolidar apoyo político, aprovechándose del clima polarizado. De hecho, varias personas mencionan que actores nacionales con perfiles populistas o tendencias autoritarias han contribuido activamente a estas dinámicas mediante "mentiras" o "conspiraciones" que presentan al adversario político como un enemigo moral que debe no solo ser derrotado, sino incluso destruido.

Finalmente, las personas entrevistadas también identifican como una consecuencia visible el aumento de diversas formas de violencia. Según relatan, la desinformación ha contribuido a normalizar el insulto y el irrespeto, habilitando comportamientos agresivos en la esfera pública que antes solían ser socialmente sancionados. Una de las personas afirmó que la "desinformación está funcionando para el irrespeto, la intolerancia, la xenofobia", mientras que otra señaló que vivimos un momento en el que, en la práctica, "se trata de odiar a aquel que no piensa como yo".

Este escenario resulta particularmente adverso para las mujeres. Varias de las entrevistadas señalan que la desinformación ha alimentado la violencia política en su contra, manifestándose en insultos, campañas de desprestigio, amenazas y ataques dirigidos a liderazgos femeninos visibles. Esta percepción es coincidente con estudios empíricos que han demostrado una escalada sin precedentes de mensajes violentos en contra no solo de las mujeres, sino también de otras poblaciones históricas como las personas afrocostarricenses, migrantes o LGBTIQ+ (COES, 2025; Mora Díaz, 2025).

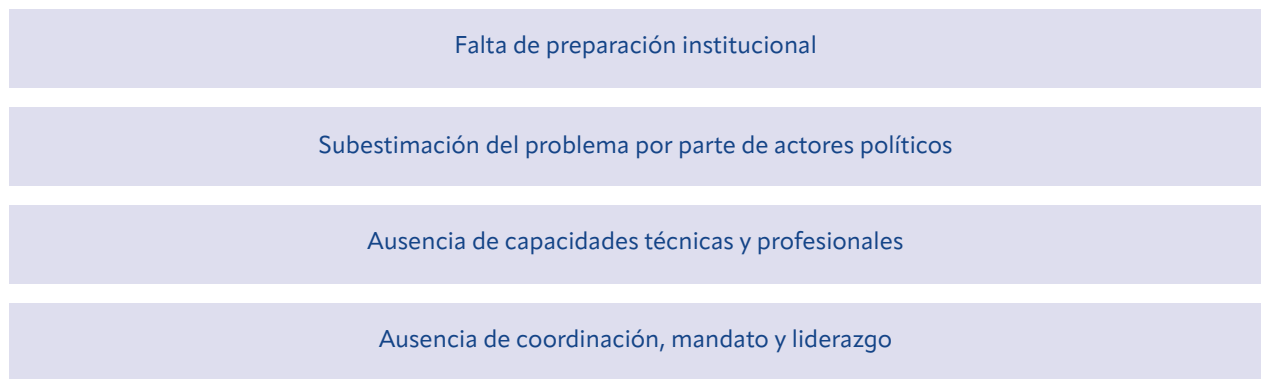
Un Estado sin defensas: la institucionalidad frente a la desinformación

El análisis de las entrevistas en este tema revela un diagnóstico ampliamente compartido: las instituciones costarricenses no están preparadas para enfrentar la desinformación. Aunque el país cuenta con una arquitectura democrática robusta y con instituciones públicas fuertes, las personas coinciden en que dichas estructuras no fueron diseñadas para enfrentar el desafío que suponen los contenidos desinformativos.

Las razones de esta indefensión no se explican únicamente por fallas de diseño. A partir de la sistematización de las respuestas, es posible identificar al menos cuatro factores adicionales e interrelacionados (Figura 18).

 **Figura 18.**

Factores que explican la debilidad institucional ante la desinformación



Fuente: elaboración propia, a partir de entrevistas a personas expertas.

En primer lugar, la falta de preparación institucional aparece como un elemento central. En la mayoría de entrevistas se coincide en que las instituciones democráticas no anticiparon la escala que alcanzaría la desinformación. Por eso, señalan, es que la respuesta ha sido predominantemente reactiva y no preventiva.

Esta ausencia de preparación no se limita únicamente a las instituciones. Varias de las personas comentan que tanto los medios de comunicación como las empresas privadas tampoco supieron leer correctamente las señales a tiempo de la capacidad destructiva de estas falsedades para la democracia y la convivencia.

Un segundo factor es la subestimación del problema por parte de la clase política. Según los y las consultadas, muchos liderazgos políticos, empresariales e incluso intelectuales no han dimensionado la gravedad del fenómeno, ni sus efectos corrosivos sobre la confianza pública, la institucionalidad y la convivencia democrática. Esta falta de prioridad política retrasa la adopción de medidas integrales y reduce el sentido de urgencia.

Un tercer elemento identificado es la ausencia de capacidades técnicas y profesionales dentro del Estado. Las instituciones carecen de equipos o de personal especializado en tecnologías digitales, alfabetización mediática, análisis de redes, verificación de contenidos u otras formaciones afines. Esta limitación dificulta de manera importante la respuesta institucional, ya que el tema suele recaer exclusivamente en quienes administran o gestionan la comunicación institucional, aun cuando su abordaje requiere competencias mucho más amplias.

El asunto es igualmente grave en el ámbito legislativo. Según varias de las personas entrevistadas, en este Poder de la República existen debilidades estructurales por parte de las personas que brindan asesoría a las diputaciones, quienes tienen una limitada comprensión técnica del problema. Esta carencia de formación en temas vinculados a la desinformación se expresa tanto entre las personas que ocupan puestos de confianza, como entre aquellas que se encuentran en la planilla de la Asamblea Legislativa. Se trata de un asunto central, ya que afecta la capacidad de diseñar marcos regulatorios adecuados y de calidad.

Finalmente, las entrevistas también evidencian una falta de coordinación y liderazgo claro en el ámbito institucional. No existe una entidad que articule a los distintos poderes de la República, instituciones autónomas, medios de comunicación, sociedad civil y sector tecnológico en una respuesta común. Más bien, lo que observan es que predominan esfuerzos aislados e iniciativas dispersas.

Cuando se consulta quién debería liderar este tema, la posición predominante es que Costa Rica no cuenta actualmente con una institución capaz de dirigir, por sí sola, la respuesta nacional frente a la desinformación. Varias personas señalan que, en un escenario ideal, el Poder Ejecutivo debería asumir ese rol. No obstante, la mayoría considera que hoy carece de la legitimidad y la capacidad necesarias, pues algunos de sus liderazgos políticos (incluido el propio presidente de la República) se han convertido en propagadores de narrativas desinformativas que, en principio, deberían contribuir a combatir.

Frente a esta realidad, el consenso principal es que se requiere una estrategia multiactor, impulsada de manera conjunta por los tres Supremos poderes de la República, el TSE, las instituciones públicas, los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil organizada. En ausencia de ese liderazgo estatal y ejecutivo articulado, son precisamente la sociedad civil y la academia quienes, según las personas entrevistadas, están llamadas a encabezar las primeras acciones de coordinación.

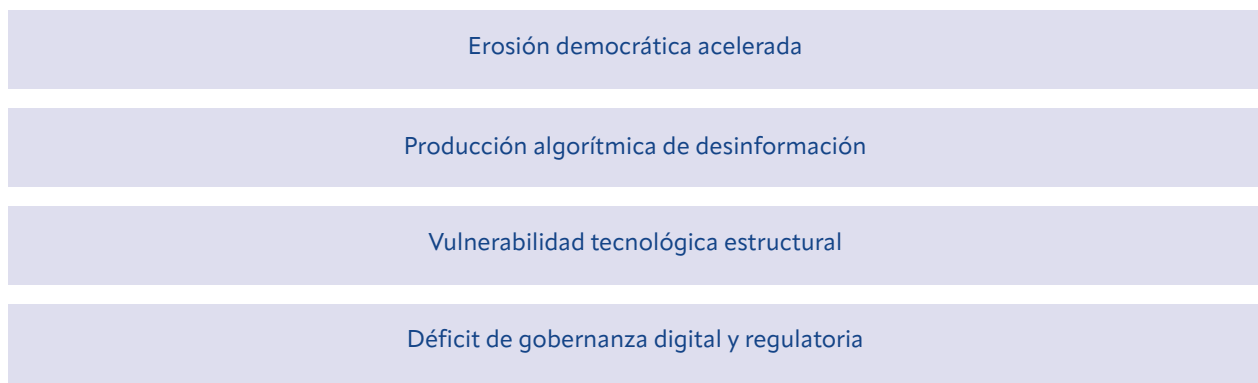
Riesgos futuros y crisis emergentes observadas

Costa Rica no solo enfrenta los efectos actuales de la desinformación, sino que se asoma a un futuro marcado por riesgos más complejos y potenciales crisis emergentes. El avance acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y los *deepfakes*² configura un escenario en el que la manipulación puede volverse casi indetectable y mucho más difícil de contener. A ello se suman las debilidades institucionales identificadas en el apartado previo, que amplifican la vulnerabilidad del país frente a estas amenazas

Las entrevistas permiten identificar cuatro grandes áreas de riesgo futuro que pueden generar diversas crisis en el país en el corto plazo (Figura 19). En primer lugar, se señala un riesgo asociado al deterioro de la convivencia democrática. Las personas describen un escenario en el que la desinformación no solo erosiona la confianza, sino que puede derivar en negacionismo electoral, ataques a órganos de control, cuestionamiento de la imparcialidad judicial y un aumento del conflicto social.

Figura 19.

Áreas de riesgo futuro vinculadas a la desinformación



Fuente: elaboración propia, a partir de entrevistas a personas expertas.

La preocupación es que estos ataques repetidos vayan normalizando la idea de que la democracia “no funciona” y abran paso a proyectos que concentren poder sin contrapesos. Varias voces lo resumen como una posible “perversión del significado mismo de la democracia”, en la que se legitiman reformas regresivas y se alimentan discursos autoritarios que capitalizan la confusión y el malestar.

Un segundo riesgo emergente que se señala es la producción algorítmica de desinformación. Es decir, contenidos falsos realizados con alta tecnología que permita manipular audios, crear vídeos con un alto grado de realismo y la microsegmentación opaca.

Las personas entrevistadas advierten que la velocidad con la que evolucionan estas herramientas superará la poca capacidad institucional, de los medios y de la ciudadanía para detectar la manipulación. En los testimonios se anticipa un escenario en el que la desinformación será más personalizada, más difícil de rastrear y casi imposible de distinguir del contenido auténtico, lo que incrementa la probabilidad de engaños electorales, difamación política, extorsión y campañas coordinadas desde el anonimato. Varios actores subrayan que la próxima campaña electoral será un punto de quiebre, pues marcará el inicio de un entorno comunicacional donde “ver no será creer” y donde incluso pruebas audiovisuales podrán carecer de valor probatorio.

² **Deepfakes** es el término consolidado en la literatura internacional para referirse a contenidos audiovisuales generados mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial que permiten la manipulación hiperrealista de rostros, voces o escenas completas. Se mantiene en inglés porque no existe una traducción al español que capture con precisión su uso técnico y porque su adopción en debates globales sobre desinformación y manipulación digital es ampliamente dominante.

Un cuarto temor es la fragilidad de la infraestructura tecnológica y de ciberseguridad del país, sumada a una falta de preparación frente a ataques digitales y operaciones externas. Las personas entrevistadas mencionan que Costa Rica ha experimentado recientemente señales de vulnerabilidad y que estos eventos podrían ser la antesala de crisis más graves. La preocupación es que la infraestructura pública y electoral no esté suficientemente protegida, que el país carezca de protocolos ante un ataque digital masivo, y que actores diversos puedan explotar esas brechas para desestabilizar instituciones, sembrar pánico o manipular procesos electorales.

Finalmente, las entrevistas identifican un riesgo futuro derivado del rezago regulatorio del país y la ausencia de un marco de gobernanza digital robusto, debido a que la legislación electoral, las normas sobre plataformas digitales y los mecanismos de transparencia de contenidos están desactualizados. También se advierte que Costa Rica no ha desarrollado aún estándares mínimos de responsabilidad algorítmica, trazabilidad de contenidos, publicidad digital, protección de datos o cooperación internacional, lo cual deja un vacío que puede ser aprovechado por actores políticos, comerciales o extranjeros.

Entre lo posible y lo necesario: ¿Qué puede hacer Costa Rica y por dónde empezar?

Las personas entrevistadas plantean que Costa Rica debe tomar medidas inmediatas en contra de la desinformación, pero debe hacerlo dentro de los límites realistas que imponen su tamaño, sus capacidades institucionales y el ritmo acelerado de cambios del propio ecosistema digital.

Para ellos y ellas, el país se encuentra en una zona intermedia donde no puede quedarse inmóvil frente a un problema que amenaza directamente a la democracia, pero tampoco posee las herramientas o el poder para enfrentarse en solitario a los actores que controlan las plataformas digitales por donde se esparce la desinformación.

A esto se le debe agregar la complejidad que puede implicar plantear regulaciones en este tema, en tanto pueden tomarse medidas violatorias a la libertad de expresión y a otros derechos constitucionales. Pese a estas limitaciones, el análisis permite identificar cinco acciones estratégicas (Figura 20).

Figura 20.

Acciones estratégicas para luchar contra la desinformación

Apostar por una regulación multinivel (nacional - internacional) gradual, coordinada y regional de las plataformas tecnológicas

Incorporar la alfabetización mediática e informacional como parte del temario obligatorio de primaria y secundaria

Darle más facultades y recursos al TSE para enfrentar la desinformación electoral

Generar espacios permanentes de coordinación interinstitucional y multiactor para enfrentar la desinformación

Fortalecer la cooperación regional e internacional para enfrentar actores extranjeros e impulsar la ciberseguridad

Fuente: elaboración propia, a partir de entrevistas a personas expertas.

En primer lugar, se señala que la regulación a las empresas tecnológicas dueñas de las plataformas por donde se esparce la desinformación es necesaria. Existe cierto consenso en que estos actores globales operan con escasa transparencia, facilitan el anonimato, incentivan la viralización del odio y el engaño, y concentran un poder desproporcionado sobre el debate público. No obstante, también se reconoce que Costa Rica carece de la capacidad para regularlas en solitario, debido a su tamaño, su limitado peso geopolítico y la naturaleza extraterritorial de estas compañías. Por ello, la regulación aparece como una prioridad urgente, aunque altamente compleja.

La mayoría de las personas señalan que Costa Rica debería avanzar hacia un proceso regulatorio gradual y alineado con estándares internacionales, estructurado en dos niveles que deben impulsarse simultáneamente: uno nacional y otro internacional. En el plano interno, algunas personas proponen apostar por un marco jurídico básico que establezca responsabilidades mínimas para las empresas tecnológicas con presencia en el país y que prohíba de forma explícita ciertas prácticas asociadas a la desinformación. En el plano internacional, algunos y algunas sugieren fortalecer la participación de Costa Rica en iniciativas multilaterales y promover la adopción de marcos regulatorios globales que permitan abordar este fenómeno con mayor coherencia y alcance.

Sin embargo, la regulación no es la única ruta y por eso se señala también la necesidad de educar y alfabetizar a las personas como segunda acción. De acuerdo a las entrevistas, la alfabetización mediática e informacional (AMI) es la base de cualquier estrategia sostenible que pretenda luchar contra este problema. De acuerdo a la UNESCO, la AMI es el conjunto de competencias que permiten a las personas acceder, evaluar críticamente, usar y crear información y contenidos mediáticos de manera ética y responsable que permitan construir ciudadanías críticas y activas, capaces de comprender el funcionamiento de los medios, enfrentar la desinformación y participar plenamente en la vida democrática (UNESCO, 2013).

La prioridad en este ámbito debe ser formar ciudadanía crítica, capaz de reconocer la manipulación y los contenidos falsos. En este punto, el Ministerio de Educación Pública aparece reiteradamente como un actor fundamental, pues se indica que es quien debe incorporar estos temas en las currículas educativas desde la educación primaria.

De acuerdo a la mayoría de las entrevistas, la tercera acción pasa por darle al TSE más atribuciones legales, herramientas y recursos financieros para luchar contra la desinformación en contextos electorales. Entre las propuestas varias de las personas participantes destacan la necesidad de contar con equipos especializados en monitoreo digital, ampliar su capacidad para supervisar la publicidad política en entornos digitales, y habilitar mecanismos de sanción contra partidos o candidaturas que recurren a herramientas de inteligencia artificial para producir contenidos manipulados con la imagen o la voz de sus contrincantes.

La cuarta acción es crear espacios de coordinación interinstitucional y multiactor. En varias de las entrevistas se señala que la debilidad del país con respecto a este tema no solo es técnica, sino de fragmentación y de ausencia de diálogo y liderazgo. Por eso, se requiere crear instancias que permitan la articulación entre los Supremos Poderes del Estado, las universidades, los medios de comunicación, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar estrategias comunes y protocolos para enfrentar este problema.

Una quinta acción debe ir dirigida a fortalecer la cooperación regional e internacional para enfrentar actores extranjeros y mejorar la ciberseguridad nacional. Dado que parte de la desinformación proviene de redes transnacionales, se sugiere reforzar la cooperación internacional con otros países del área, compartir metodologías, prevenir interferencias externas y robustecer la ciberseguridad del país, especialmente ante riesgos asociados a campañas coordinadas y eventuales operaciones extranjeras que buscan deliberadamente influir en procesos políticos y electorales internos.

DESINFORMACIÓN Y PLANES DE GOBIERNO 2026 - 2030

DESINFORMACIÓN Y PLANES DE GOBIERNO 2026 - 2030

Los hallazgos presentados permiten dimensionar cómo la desinformación se experimenta, se percibe y se interpreta desde distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, falta una pieza clave del panorama: la visión de quienes aspiran a gobernar el país. Esta sección examina los planes de gobierno de las candidaturas presidenciales para determinar si incorporan diagnósticos, compromisos o propuestas frente a la desinformación y sus impactos.

Análisis comparado de los planes de gobierno

El análisis de los documentos programáticos evidencia una marcada tendencia a la omisión en este tema. Aunque la ciudadanía reconoce la desinformación como un problema, según lo revelado por la encuesta, y pese a que tanto las entrevistas como los grupos focales coinciden en que constituye una amenaza sustancial para el régimen democrático, la mayoría de los partidos no menciona el fenómeno en sus propuestas, ni lo reconoce como un desafío para el país (Figura 21).

De los 20 planes de gobierno, solo los partidos Avanza, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Centro Democrático y Social, así como la Coalición Agenda Ciudadana mencionan explícitamente el fenómeno, lo reconocen como un problema y plantean diversas soluciones para enfrentarlo. Los 15 planes restantes no incorporan ninguna referencia explícita al tema de contenidos desinformativos, ni propuestas para lidiar con este asunto.

Figura 21.

Tratamiento de la desinformación en los planes de gobierno

Partido	Candidatura Presidencial	¿Menciona la desinformación y la reconoce como un problema?	¿Brinda soluciones?
Alianza Costa Rica Primero	Douglas Camaño Quirós	No	No
Aquí Costa Rica manda	Ronny Castillo González	No	No
Avanza	José Aguilar Berrocal	Sí	Sí
Centro Democrático y Social	Ana Virginia Calzada	Sí	Sí
Coalición Agenda Ciudadana	Claudia Dobles Camargo	Sí	Sí
De la clase trabajadora	David Hernández Brenes	No	No
Esperanza Nacional	Claudio Alpizar Otoyá	No	No
Esperanza y Libertad	Marcos Rodríguez Badilla	No	No
Frente Amplio	Ariel Robles Barrantes	Sí	Sí
Integración Nacional	Luis Amador Jiménez	No	No
Justicia Social Costarricense	Walter Hernández Juárez	No	No
Liberación Nacional	Álvaro Ramos Chaves	No	No
Liberal Progresista	Eliécer Feinzag Mintz	No	No
Nueva Generación	Fernando Zamora Castellanos	No	No
Nueva República	Fabrizio Alvarado Muñoz	No	No
Progreso Social Democrático	Luz Mary Alpizar Loaiza	No	No
Pueblo Soberano	Laura Fernández Delgado	No	No
Unidad Social Cristiana	Juan Carlos Hidalgo	Sí	Sí
Unidos Podemos	Natalia Díaz Quintana	No	No
Unión Costarricense Democrática	Boris Molina Acevedo	No	No

Fuente: elaboración propia, a partir de planes de gobierno enviados al Tribunal Supremo de Elecciones.

Las agrupaciones Liberación Nacional, Esperanza Nacional, Pueblo Soberano, Nueva República y Liberal Progresista incluyen propuestas relacionadas con la alfabetización digital, el desarrollo de competencias para desenvolverse en entornos digitales o la educación para prevenir estafas en línea. No obstante, estas iniciativas no constituyen propuestas específicas sobre desinformación y, en la mayoría de los casos, se presentan de forma general y poco articulada con los desafíos propios del fenómeno.

Esta revisión evidencia una desconexión significativa entre uno de los desafíos que visualiza tanto la ciudadanía, actores sociales y las poblaciones víctimas de este tipo de contenidos y las prioridades programáticas de la mayoría de fuerzas políticas. Este patrón confirma que la integridad informativa, la alfabetización mediática e informacional y la lucha contra los contenidos desinformativos no están integrados de manera sistemática en las agendas de quienes se proponen liderar el país a partir del próximo año.

Medidas y acciones propuestas

Los planes de gobierno analizados muestran que, aunque existe un reconocimiento de la desinformación como un desafío para la democracia costarricense, los enfoques y propuestas varían significativamente en alcance y énfasis (Figuras 22, 23, 24, 25 y 26).

Algunos partidos se concentran en los riesgos tecnológicos emergentes y en la necesidad de marcos regulatorios asociados a la inteligencia artificial, mientras que otros privilegian respuestas educativas orientadas a fortalecer competencias digitales y pensamiento crítico en la ciudadanía. También aparecen enfoques más políticos y estructurales, que vinculan la desinformación con la erosión del espacio público, los discursos de odio y el debilitamiento institucional, así como propuestas que buscan elevar la capacidad de regulación y fiscalización del Estado frente a plataformas y actores digitales. En conjunto, los resultados evidencian una comprensión compartida de la desinformación como problema, pero también revelan una diversidad notable en las rutas de solución, que van desde la alfabetización mediática hasta la regulación de plataformas, pasando por iniciativas de gobernanza algorítmica y compromisos en foros internacionales.

Figura 23.

Enfoque y propuestas planteadas por el Partido Avanza



Enfoque sobre el problema:

Identifica la desinformación, la desinformación automatizada y los “deepfakes” como posibles impactos de la tecnología. Señalan que se debe adoptar el concepto de “IA for Good” (Inteligencia Artificial para el bien) con el fin de utilizar la inteligencia artificial y la tecnología para resolver problemas humanos y ambientales, en lugar de enfocarse solo en ganancias económicas o aplicaciones de riesgo.



Propuestas

Propone desarrollar un sistema de “Matriz nacional de mitigación de impactos de IA” que incluya desinformación y deepfakes, sesgos y privacidad; así como generar protocolos para integridad electoral y desinformación automatizada.

Fuente: elaboración propia, a partir del plan de gobierno de la agrupación publicado en el sitio web del TSE.

Figura 23.

Enfoque y propuestas planteadas por el Partido Centro Democrático y Social



Enfoque sobre el problema:

Señala que la desinformación erosiona la convivencia social y amenaza la paz, e indica que este tipo de contenidos ha generado un ambiente hostil para periodistas, personas comunicadoras y sociedad civil debilitando con ello el pluralismo informativo y afectando el derecho a recibir información veraz y diversa.



Propuestas

Propone fortalecer la cobertura de la formación en competencias digitales en todos los niveles y en todos los centros educativos, en alfabetización digital, el pensamiento computacional y el uso ético de la inteligencia artificial, formando a estudiantes y docentes para la sociedad de la información y el conocimiento.

Fuente: elaboración propia, a partir del plan de gobierno de la agrupación publicado en el sitio web del TSE.

Figura 24.

Enfoque y propuestas planteadas por el Partido Centro Democrático y Social



Enfoque sobre el problema:

Para el PUSC, la desinformación es uno de los factores que complejizan el escenario global actual. Lo señalan como un elemento disruptor, vinculado al debilitamiento de las reglas y los paradigmas de defensa colectiva que tenemos como sociedad.



Propuestas

Propone aumentar el protagonismo del país en foros y organismos internacionales con el fin de liderar normativamente en temas como inteligencia artificial y desinformación. Además, se compromete a integrar la alfabetización digital y la ciberseguridad en el sistema educativo nacional para formar una ciudadanía consciente de los riesgos y capaz de protegerse en el entorno digital.

Fuente: elaboración propia, a partir del plan de gobierno de la agrupación publicado en el sitio web del TSE.

Figura 24.

Enfoque y propuestas planteadas por el Partido Frente Amplio



Enfoque sobre el problema:

Identifica la desinformación como parte de las responsables de la crisis democrática actual, y le atribuye una alta responsabilidad en la degradación del espacio público vinculándola con los discursos de odio, el populismo autoritario y la creciente apatía de la ciudadanía hacia lo político.



Propuestas

La agrupación se compromete a impulsar una reforma legal relativa al uso de redes sociales y tecnologías digitales en campañas electorales, con el fin de “prevenir estrategias de desinformación y excluir discursos de odio, sin afectar el pluralismo político como principio esencial de la democracia”. De acuerdo al plan, el fin de esta reforma es que las campañas electorales sean espacios de información verificada y debate fundamentado. No desarrolla la propuesta legislativa que impulsará.

El partido plantea una regulación sobre las empresas de marketing y tecnología. Según advierten, estas firmas emplean publicidad de vigilancia y algoritmos para influir en la ciudadanía sin su consentimiento explícito durante las campañas electorales, y algunas intentan trasladar estas prácticas a las instituciones públicas. Ello provoca que las entidades estatales desvíen su función informativa hacia la lógica de campañas permanentes, donde se reproducen estrategias de desinformación, posverdad y vigilancia de opositores y personas críticas. Por tanto, se trata de un tema que, a criterio de la agrupación, se debe regular.

De igual forma, también proponen integrar en el currículo de secundaria la alfabetización digital ética y el uso crítico de la inteligencia artificial (IA).

Fuente: elaboración propia, a partir del plan de gobierno de la agrupación publicado en el sitio web del TSE.

Figura 26.

Enfoque y propuestas planteadas por la **Coalición Agenda Ciudadana**



Enfoque sobre el problema:

Identifica la desinformación como parte de las responsables de la crisis democrática actual, y le atribuye una alta responsabilidad en la degradación del espacio público vinculándola con los discursos de odio, el populismo autoritario y la creciente apatía de la ciudadanía hacia lo político.



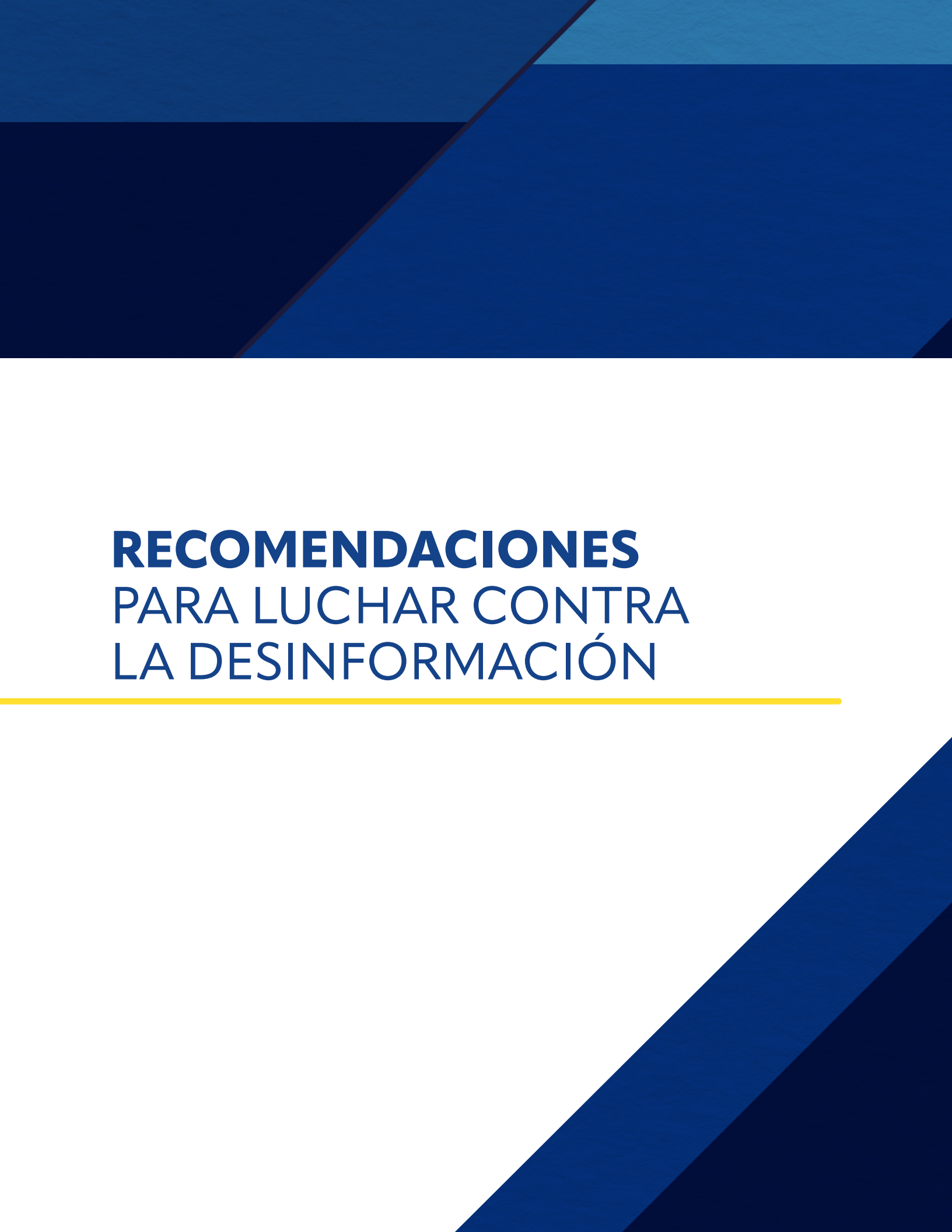
Propuestas

La coalición propone incorporar elementos de Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) en los programas de estudio de Educación Cívica, tanto de primaria como de secundaria, para que las personas jóvenes desarrollen capacidades de verificación, pensamiento crítico, comprensión de los algoritmos y uso ético de las redes sociales y la tecnología. Además, señala que este esfuerzo debe complementarse con programas de formación docente y con iniciativas dirigidas a personas adultas, de modo que toda la ciudadanía fortalezca su resiliencia frente a la desinformación.

Adicionalmente, se compromete a impulsar, tanto en foros internacionales como en la normativa nacional, regulaciones democráticas que obliguen a las grandes plataformas digitales a contar con representantes legales en el país, de manera que puedan responder efectivamente ante las autoridades nacionales y cumplir con obligaciones de transparencia, auditoría y cooperación judicial. Además, señalan que apoyarán la adopción de normas que garanticen la trazabilidad y transparencia de la publicidad política en redes sociales, de modo que tanto la ciudadanía como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puedan fiscalizar posibles irregularidades.

Finalmente, también se comprometen con legislación para establecer sanciones claras cuando partidos políticos, autoridades o actores organizados utilicen cuentas inauténticas coordinadas para simular interacción humana o promover discursos de odio y desinformación contra sus oponentes.

Fuente: elaboración propia, a partir del plan de gobierno de la agrupación publicado en el sitio web del TSE.



RECOMENDACIONES
PARA LUCHAR CONTRA
LA DESINFORMACIÓN

RECOMENDACIONES PARA LUCHAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Con base en las entrevistas realizadas a personas expertas y con liderazgo institucional, así como en las respuestas en los grupos focales se proponen a continuación una serie de recomendaciones para luchar contra la desinformación en diversas áreas. Se debe apostar por un enfoque integral que incorpore la regulación democrática, la educación, la coordinación y la cooperación internacional.

Regulaciones nacionales mínimas para las plataformas tecnológicas. Avanzar hacia regulaciones nacionales para las empresas dueñas de las plataformas tecnológicas, de tal manera que asuman responsabilidades por el uso de estos espacios digitales para propagar contenidos desinformativos. Dichas normativas deben estar alineadas con estándares internacionales en materia de derechos humanos y no deben poner en peligro la libertad de expresión.

Impulsar un bloque regulatorio latinoamericano. Dado el carácter transfronterizo de la desinformación y el poder asimétrico de las grandes plataformas tecnológicas, es indispensable que Costa Rica impulse, a la par de las normativas nacionales mínimas, mecanismos de regulación y actuación conjunta a nivel latinoamericano. Las autoridades nacionales deben promover la creación de un bloque regulatorio regional que armonice principios, estándares y protocolos de respuesta frente a la desinformación, de modo que los países del continente actúen con mayor capacidad de negociación frente a actores globales.

Sanciones a partidos políticos que utilizan la desinformación. Se deben establecer sanciones claras y proporcionales para los partidos políticos y candidaturas que produzcan o financien contenidos desinformativos destinados a manipular la voluntad del electorado o alterar la equidad de la contienda electoral. Debe prohibirse expresamente en la normativa el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar materiales que simulen o imiten la imagen, voz o identidad de personas candidatas cuando su propósito sea inducir a error al electorado o erosionar la confianza pública en el proceso electoral. Además, se debe obligar a los partidos políticos y agencias de publicidad a incorporar un etiquetado para toda pieza publicitaria generada total o parcialmente mediante inteligencia artificial, con el fin de promover la transparencia, asegurar la trazabilidad de los contenidos y reducir el riesgo de manipulación informativa a gran escala.

AMI como pilar educativo nacional. La Alfabetización Mediática e Informativa (AMI) debe convertirse en una política de Estado. Para ello, se debe incorporar de manera obligatoria en los planes de estudio desde la primaria con el fin de que se incentive el pensamiento crítico sobre fuentes, algoritmos y sesgos a lo largo de toda la formación estudiantil. También, se debe capacitar al personal docente para garantizar enfoques actualizados y pedagógicamente sólidos, y se deben integrar habilidades digitales y competencias informacionales en los planes de estudio universitarios, de modo que la ciudadanía cuente con herramientas para enfrentar la desinformación a lo largo de toda su vida.

Blindaje estatal frente a amenazas digitales. Se debe fortalecer la resiliencia institucional frente a amenazas digitales mediante la detección temprana de posibles interferencias extranjeras y operaciones coordinadas de desinformación, así como el mejoramiento de sus sistemas de alerta y monitoreo de anomalías en el entorno digital. Esto implica integrar herramientas avanzadas de análisis forense, vigilancia del comportamiento inusual en redes y protocolos interinstitucionales de respuesta rápida, con el fin de proteger tanto la estabilidad democrática como la integridad de los procesos electorales.

Fortalecimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. Es necesario incrementar los recursos y la capacidad del Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda realizar un adecuado monitoreo digital, agilizar sus tiempos de respuesta y mejorar la efectividad de su comunicación pública. De igual forma, también se requiere que los sectores políticos discutan una posible ampliación de sus facultades legales en materia de lucha contra la desinformación.

Coordinación interinstitucional permanente. Se debe crear una instancia de coordinación interinstitucional permanente para luchar contra la desinformación. Este espacio debería ser mixto y debería procurar reunir a la Asamblea Legislativa, el TSE, el MICITT, el Poder Judicial, así como a expertos y organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que se puedan establecer protocolos comunes de respuesta rápida que permitan actuar de manera coherente y eficaz ante incidentes informáticos con el fin de superar la fragmentación actual en la que cada institución opera de manera aislada, limitando el impacto de las acciones del Estado.

Fortalecimiento de capacidades técnicas en el sector público. El Estado costarricense enfrenta una brecha significativa de capacidad técnica en materia digital: las decisiones relacionadas con tecnologías, plataformas, IA, ciberseguridad y desinformación suelen tomarse sin criterios especializados, con asesorías insuficientes, desconocimiento legislativo y poca continuidad en equipos técnicos. Esta falta de experticia deriva en decisiones improvisadas, baja calidad regulatoria y vulnerabilidad frente a actores privados y amenazas digitales emergentes. Por ello, se debe crear un programa de profesionalización para equipos ministeriales, asesores legislativos y autoridades públicas, que incluya formación en gobernanza digital, inteligencia artificial, regulación de plataformas, ciberseguridad y desinformación. Esta medida elevaría de forma significativa la competencia técnica del Estado sin necesidad de crear nuevas instituciones.

Fortalecimiento de medios de comunicación y verificadores. El avance de la desinformación se ve agravado por el debilitamiento económico y operativo del ecosistema mediático costarricense. Muchos medios carecen de recursos suficientes para sostener investigaciones rigurosas, mantener equipos de verificación robustos o responder con rapidez a narrativas manipuladoras, mientras que el periodismo enfrenta ataques, campañas de intimidación y un entorno digital cada vez más hostil. Para atender este desafío, se debe crear un programa nacional de fortalecimiento de medios y verificadores, que incluya capacitación en verificación digital avanzada, apoyo financiero a proyectos de periodismo independiente, redes de colaboración entre medios y academia, y mecanismos de protección frente a ataques coordinados o campañas de odio.

PRINCIPALES HALLAZGOS

PRINCIPALES HALLAZGOS

- ▲ **La desinformación es percibida como una amenaza seria y creciente para la democracia costarricense.** Los resultados de la encuesta revelan que existe una percepción mayoritaria de que la desinformación constituye un problema relevante en el país. Cuando se consultó en qué medida consideran que la desinformación es un problema, 81% de las personas respondió que "mucho". Además, una amplia mayoría considera que la desinformación puede dañar la reputación de las personas, incentivar expresiones de odio, interferir en las próximas elecciones y representar una amenaza para la democracia costarricense. Este conjunto de percepciones refleja un consenso ciudadano claro sobre la gravedad del problema y sus impactos en la vida política y social.
- ▲ **El nivel educativo juega un papel importante en cómo las personas perciben y entienden la desinformación.** El análisis de la encuesta evidencia que quienes tienen educación universitaria, en comparación con quienes cuentan con educación primaria o menos, tienen una probabilidad significativamente mayor de estar de acuerdo con los enunciados sobre que la desinformación es un problema serio para el país y la democracia, que puede causar daños reputacionales a terceros, y que es importante el desarrollo de habilidades para reconocerla y evitar su difusión.
- ▲ **La confianza en la propia capacidad para detectar desinformación varía según el género y la situación económica.** El análisis de la encuesta revela que los hombres son 8 puntos porcentuales más propensos a reportar confianza en su capacidad para detectar contenidos falsos en comparación con las mujeres. De igual forma, al comparar a quienes reportan que su ingreso no les alcanza y enfrentan grandes dificultades con quienes indican que les alcanza y pueden ahorrar, las primeras son 12 puntos porcentuales más propensas a no confiar en su capacidad para distinguir contenidos falsos.
- ▲ **Existe una brecha entre la percepción propia y ajena para enfrentar la desinformación.** Aunque el 73% confía en su propia capacidad para identificar contenidos desinformativos o falsos, solo el 34% confía en la capacidad de los demás. Se trata de un "efecto de tercera persona" que puede generar dificultades para asumir responsabilidades individuales en tanto una gran cantidad de personas lo puede considerar un problema de "los otros" y no propio.
- ▲ **La desinformación circula en las plataformas más utilizadas en Costa Rica.** El 28% de las personas encuestadas confiesa haber confiado y creído recientemente en algún contenido que posteriormente resultó ser falso. Los contenidos falsos fueron consumidos mayoritariamente por Facebook, aunque también fueron vistos en WhatsApp y TikTok.
- ▲ **La desinformación se difunde en las plataformas mediante el uso de vídeos.** Las personas participantes de los grupos focales coinciden en que los vídeos son el formato más común para divulgar contenidos desinformativos, principalmente a través de redes sociales digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y TikTok.

- ▲ **La desinformación también reproduce discursos de odio.** Para las personas participantes en los grupos focales los contenidos desinformativos sobre grupos y poblaciones afectadas han aumentado, promoviendo además discursos de odio en las redes sociales digitales. Según relatan, algunos planteamientos o encuadres originados en contenidos desinformativos han alcanzado medios de comunicación.
- ▲ **La desinformación beneficia a los gobiernos de turno.** Las personas participantes en los grupos focales coinciden en que la desinformación está beneficiando al gobierno de turno. Señalan que esta dinámica reduce sus espacios de incidencia y cuenta con la complicidad de ciertas figuras públicas que intimidan a otras personas para limitar su participación política.
- ▲ **La desinformación ya está afectando la democracia.** Las personas expertas entrevistadas señalan que la propagación de contenidos falsos ya está generando confusión informativa y dificultad para distinguir hechos de falsedades. Además, está generando una erosión de la confianza en instituciones democráticas y órganos de control, normalizando discursos de odio, fomentando la polarización política y debilitando el involucramiento cívico
- ▲ **Un Estado sin preparación, ni articulado.** Tanto las personas entrevistadas, como las que participaron en los grupos focales, coinciden en que el Estado costarricense no se encuentra preparado para enfrentar este problema. No existe ni una estrategia nacional, ni un liderazgo en el ámbito institucional. Además, falta coordinación entre los poderes públicos, los medios, la academia y la sociedad civil. Adicionalmente, se identifican severas carencias en las capacidades técnicas y profesionales de quienes laboran en el sector público para poder enfrentar este tema, así como una subestimación del problema en la clase política.
- ▲ **Los riesgos futuros delimitan un escenario aún más complejo.** La valoración prospectiva realizada en las entrevistas y por quienes participaron en los grupos focales es, en términos generales, pesimista. La mayoría de las personas anticipan que, en los próximos años, podría producirse un incremento significativo de la confusión informativa, acompañado de una erosión democrática acelerada y un desgaste creciente de la legitimidad institucional. A ello se suma la posibilidad de enfrentar una producción algorítmica y masiva de desinformación, capaz de intensificar la incertidumbre pública y dificultar cada vez más la distinción entre lo verdadero y lo falso.
- ▲ **Desconexión entre la gravedad del problema y la oferta electoral de los partidos políticos.** Existe una desconexión evidente entre la gravedad del problema tal como lo perciben la ciudadanía, las personas expertas y los grupos afectados, y la limitada atención que le prestan los partidos políticos. La revisión de los 20 planes de gobierno entregados al Tribunal Supremo de Elecciones muestra que solo cinco agrupaciones mencionan explícitamente la desinformación, la reconocen como un problema o plantean soluciones para enfrentarla. La mayoría de partidos y candidaturas omiten el tema tanto en sus diagnósticos como en sus propuestas, lo que constituye una ausencia programática relevante de cara a las Elecciones Nacionales. Incluso entre las agrupaciones que sí incluyen el tema, los enfoques son dispares y, en algunos casos, se limitan a planteamientos generales sobre alfabetización digital.

REFERENCIAS

- Alfaro, J. (2018). Grupos radicales y delincuentes estuvieron involucrados con marcha xenofóbica en San José. Semanario UNIVERSIDAD. <https://semanariouniversidad.com/pais/grupos-radicales-y-delincuentes-estuvieron-involucrados-con-marcha-xenofobica-en-san-jose/>
- Bolaños, D. (2024). Sala Constitucional no ha dicho que la Contraloría cogobierna. Doble Check. <https://radios.ucr.ac.cr/2024/10/doblecheck/sala-iv-no-ha-dicho-que-contraloria-cogobierna/>
- Brenes Peralta, C., Pérez Sánchez, R., & Siles González, I. (2021). Predictores psicosociales de la exposición y difusión de noticias falsas en Costa Rica. Cuadernos.info, 49, 213–236. <https://dx.doi.org/10.7764/cdi.49.27437>
- Brenes Peralta, C., Siles, I., & Tristán-Jiménez, L. (2024). Nuestras apps de cada día (2024): 2do informe sobre el uso de plataformas digitales en Costa Rica. CICOM. https://cicom.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/05/CICOM_Nuestras-Apps-de-cada-dia-2024.pdf
- Carazo-Barrantes, C., Tristán-Jiménez, & Cajina-Rojas, M. (2023). Fake News: Where Journalists and Audiences Meet (and Where They Don't). *Contracontexto*, 39, 185–214.
- Carazo-Barrantes, C., Tristán-Jiménez, L., & Siles, I. (2021). Noticias falsas en Costa Rica: Hacia una agenda de investigación. En *Verdad en extinción: Miradas interdisciplinarias a la desinformación en Costa Rica* (pp. 3–45). Centro de Investigación en Comunicación.
- Carranza, I. (2023). Narración en la vida social. En López, C., Carranza, I. & van Dijk, T. A. (Ed.), *Estudios del discurso. The Routledge Handbook of Spanish Language Discourse Studies* (pp. 51-64). Londres: Roudedge.
- Castro, K. (2018). Estas fotos no son de la Marcha de la Diversidad en el país. CRHoy.com. <https://www.crhoy.com/nacionales/nocaiga-estas-fotos-no-son-de-la-marcha-de-la-diversidad-en-el-pais/>
- Céspedes, J. A. (2020). Es falso que refugiados reciben cédula y pueden votar en elecciones costarricenses. *La Nación*. <https://www.nacion.com/no-coma-cuento/nocomacuento-es-falso-que-refugiados-reciben/75DVCNKZP-NCLXBRIRDQU6HKQGM/story/>
- Chaves, R. (2025). Rodrigo Chaves llama "filibusteros" a magistrados, diputados y fiscal general: "Vengan, aquí los estoy esperando". *La República*. <https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-llama-filibusteros-a-magistrados-diputados-y-fiscal-general-vengan-aqui-los-estoy-esperando>
- Chinchilla, D. (2024). Las desinformaciones más persistentes del Gobierno en el 2024. Doble Check. <https://radios.ucr.ac.cr/2025/01/doblecheck/desinformaciones-del-gobierno-2024/>
- Chinchilla, D. (2025). Menores de edad sí pueden ir a Marcha del Orgullo. Doble Check. <https://radios.ucr.ac.cr/2025/07/doblecheck/menores-si-pueden-ir-a-marcha-del-orgullo/>
- Chinchilla, S. (2021). Estudio de Oxford: Políticos y troles manipulan opinión en Costa Rica con estrategias rudimentarias de fakenews. *La Nación*. <https://www.nacion.com/el-pais/politica/estudio-de-oxford-politicos-y-troles-manipulan/VGOXDHIAEFH6ZPDQEAPKO6W4U4/story/>

- Chinchilla, S. (2022). Hospital de Niños desmiente supuesta saturación por casos de Guillain-Barré. *La Nación*. <https://www.nacion.com/no-coma-cuento/hospital-de-ninos-desmiente-supuesta-saturacion/BCFLK4UGDVHE-BOKV3NWWVBHICFQ/story/>
- CIEP. (2025). Encuesta de Opinión Pública ECP y CIEP-UCR septiembre de 2025. <https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-SEPTIEMBRE-2025.html>
- COES. (2025). Discursos de odio y discriminación. Análisis de redes sociales. Naciones Unidas. <https://costarica.un.org/es/299679-informe-sobre-discursos-de-odio-y-discriminaci%C3%B3n-2025>
- Colomina Saló, C., & Pérez-Soler, S. (2022). Desorden informativo en la Unión Europea: Construyendo una respuesta normativa. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 131, 141–161. <https://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.2.141>
- Comisión Europea. (2018). Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Acción contra la desinformación. (No. JOIN(2018) 36 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52018JC0036>
- Córdoba, P. (2024). Usuarios utilizan fotos de Alaska en publicaciones sobre falsa inundación en terreno del nuevo hospital de Cartago. *La Nación*. <https://www.nacion.com/no-coma-cuento/usuarios-utilizan-fotos-de-alaska-en-publicaciones/5TPR7N5KVCU3ODZLEIGP63Y7Y/story/>
- Council of the European Union. (2025). Disinformation and democratic resilience. Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/disinformation-and-democratic-resilience/>
- Davison, W. (1983). The third-person effect in communication. *The Public Opinion Quarterly*, 47(1), 1–15.
- European Commission. (2021). Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation. European Commission. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation>
- Esin, C., Fathi, M. & Squire, C. (2014). Narrative analysis: the constructionist approach. En *The SAGE handbook of qualitative data analysis* (pp. 203-216). SAGE Publications Ltd, <https://www.doi.org/10.4135/9781446282243>
- Foucault, M. (2019). *Microfísica del poder* (H. Pons, Trad.). Siglo Veintiuno Editores Argentina.
- Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa: Vol. Volúmenes 1-2*. Taurus.
- Habermas, J. (1992). *Factibilidad y validez*. Trotta.
- Harjuniemi, T. (2022). Post-truth, fake news and the liberal 'regime of truth' – The double movement between Lippmann and Hayek. *European Journal of Communication*, 37(3), 269–283. <https://doi.org/10.1177/02673231211046784>
- Harsin, J. (2015). Regimes of Post-truth, Post-politics, and Attention Economies. *Communication, Culture and Critique*, 8(2). <https://doi.org/10.1111/cccr.12097>

- Jiménez Segura, N. (2022). Detenidos tras irrumpir en hospital son investigados por motín, resistencia y amenazas. Teletica.com. https://www.teletica.com/nacional/detenidos-tras-irrupir-en-hospital-son-investigados-por-motin-resistencia-y-amenazas_303987
- Jones, J. (2009). Believable fictions: Redactional culture and the will to truthiness. En B. Zelizer (Ed.), *The changing face of journalism*. Routledge.
- Kent, K. S. (2013). Propaganda, Public Opinion, and the Second South African Boer War. *Inquiries Journal/Student Pulse*, 5(10). <http://www.inquiriesjournal.com/a?id=781>
- Klein, D. O., & Wueller, J. R. (2017). Fake news: A legal perspective. *Australasian Policing*, 10(2). <https://ssrn.com/abstract=2958790>
- Kuo, R., & Marwick, A. (2021). Critical disinformation studies: History, power, and politics. *Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-76>
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F. ., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watss, D. J., & Zittraing, J. (2018). The science of fake news. *SCIENCE*, 359(6380), 1094–1096. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao2998>
- May, S. (2025). Estado de la Justicia: “el Poder Judicial está bajo ataque”. *Delfino*. <https://delfino.cr/2025/06/estado-de-la-justicia-el-poder-judicial-esta-bajo-ataque>
- Mora, C. (2025). Se desata ola de ‘fakenews’ sobre cédula digital y elecciones del 2026. *La Nación*. <https://www.nacion.com/no-coma-cuento/se-desata-ola-de-fakenews-sobre-cedula-digital-y/QSTFILVWLVEY5LWL55UWE-ZOXEI/story/>
- Mora Diaz, D. (2025). Costa Rica registra 2.1 millones de discursos de odio en redes sociales: Ataques políticos, a mujeres, y población LGBTIQ+, lideran el aumento. *Sitio web de las Naciones Unidas Costa Rica*. <https://costa-rica.un.org/es/299708-costa-rica-registra-21-millones-de-discursos-de-odio-en-redes-sociales-ataques-pol%C3%ADticos>
- Muñoz, D. (2025). Afirmaciones de Chaves debilitan Estado de derecho y allanan terreno a prácticas autoritarias, dice Poder Judicial. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/afirmaciones-de-chaves-debilitan-estado-de-derecho-y-allanan-terreno-a-practicas-autoritarias-dice-poder-judicial/>
- Organización de los Estados Americanos. (2019). Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. *Secretaría General de la OEA*. https://www.oas.org/es/cidh/expression/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf
- Pomareda, F. (2024). Es falsa la imagen con datos sobre presunta encuesta de intención de voto por partidos políticos que circula en redes sociales. *Semanario Universidad*. <https://semanariouniversidad.com/pais/es-falsa-la-imagen-con-datos-sobre-presunta-encuesta-de-intencion-de-voto-por-partidos-politicos-que-circula-en-redes-sociales/>

- Posetti, J., & Matthews, A. (2018). A short guide to the history of 'fake news' and disinformation: A learning module for journalists and journalism educators. International Center for Journalims. https://www.icfj.org/sites/default/files/2018-07/A%20Short%20Guide%20to%20History%20of%20Fake%20News%20and%20Disinformation_ICFJ%20Final.pdf
- Programa Estado de la Nación. (2025). Estado de la Nación 2025. Consejo Nacional de Rectores. https://estadonacion.or.cr/capitulo/?doc=IEN2025_cap5
- Romero, F. (2024). TSE: Nunca antes de previo a una elección habíamos sido objetivo de una ofensiva digital de desinformación tan agresiva. Monumental. <https://www.monumental.co.cr/2024/02/04/tse-nunca-antes-de-previo-a-una-eleccion-habiamos-sido-objetivo-de-una-ofensiva-digital-de-desinformacion-tan-agresiva/>
- Ruiz, P. (2025). Rodrigo Chaves arremete contra fiscal general en marcha que encabezó para pedir su renuncia. El Observador. <https://observador.cr/rodrigo-chaves-arremete-contra-fiscal-general-en-marcha-que-encabezo-para-pedir-su-renuncia/>
- Segura, A. (2025). #NoCaiga: Imagen de cucaracha en radiografía de hospital de Nicoya es falsa. CRHoy.com. <https://crhoy.com/nacionales/nocaiga-imagen-de-cucaracha-en-radiografia-de-hospital-de-nicoya-es-falsa/>
- Solano, J. (2018). Agresivos troles alimentaron marcha xenofóbica en San José. CRHoy.com. <https://www.crhoy.com/nacionales/agresivos-troles-alimentaron-marcha-xenofobica-en-san-jose/>
- Tribunal de Cuentas Europeo. (2021). Informe Especial n.o 09/2021: La respuesta de la UE a la desinformación. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/disinformation-9-2021/es/>
- UNESCO. (2013). Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606>
- Waisbord, S. (s/f). Truth is what happens to news: On journalism, fake news and post-truth. *Journalism Studies*, 19(13), 1866–1878. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>
- Waisbord, S. (2021). Qué sabemos sobre desinformación y acciones para contrarrestar la desinformación. En C. Carazo-Barrantes, L. Tristán-Jiménez, & I. Siles (Eds.), *Verdad en extinción: Miradas interdisciplinarias a la desinformación en Costa Rica* (pp. 21–52). Centro de Investigación en Comunicación.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy-making. Council of Europe. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>
- Wodak, R. (2003). El enfoque histórico del discurso. En R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Métodos de análisis crítico del discurso* (pp. 101–141). Gedisa.